

LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

-Subastas electrónicas.

-Acuerdos marco.

-Sistemas dinámicos de contratación.

-Las centrales de contratación.

-Registro de contratistas y de contratos.

-Plataforma de contratación del Estado y Perfil del contratante.

-Disposiciones transitorias y entrada en vigor de la Ley.

Federico Suárez Cancelo.

**1.-LA SUBASTA ELECTRÓNICA.**

**Definición.**

El TRLCS ya regulaba este sistema que en ningún caso pude ser considerado como un procedimiento de adjudicación del contrato, si no como un medio o especialidad a través del cual aplicar los procedimientos de contratación abierto, restringido o negociado.

La LCSP dedica el artículo 143 a su regulación estableciendo su apartado 1 que:

“A efectos de la adjudicación del contrato podrá celebrarse una subasta electrónica, articulada como un proceso electrónico repetitivo, que tiene lugar tras una primera evaluación completa de las ofertas, para la presentación de mejoras en los precios o de nuevos valores relativos a determinados elementos de las ofertas que las mejoren en su conjunto, basado en un dispositivo electrónico que permita su clasificación a través de métodos de evaluación automatizados, debiendo velarse por que el mismo permita un acceso no discriminatorio y disponible de forma general, así como el registro inalterable de todas las participaciones en el proceso de subasta.”

Por lo tanto una «subasta electrónica» es un **proceso repetitivo** basado en un **dispositivo electrónico** de presentación de **nuevos precios, revisados a la baja**, o de nuevos valores relativos a determinados elementos de las ofertas que tiene lugar tras una primera evaluación completa de las ofertas y que permite proceder a su clasificación mediante métodos de evaluaciones automáticos

Por lo tanto sus rasgos definitorios serán:

* Es un **proceso iterativo (repetitivo)** para adjudicar contratos,
* Que tiene lugar tras una **primera evaluación completa de las ofertas**,
* Para la presentación de **mejoras en los precios o de nuevos valores relativos a determinados elementos de las ofertas que las mejoren en su conjunto**,
* Basado en un **dispositivo electrónico**
* Que permita su clasificación a través de métodos de **evaluación automáticos**.

NOVEDAD.-Una novedad del citado artículo 143 de la LCSP 2017 será que incorpora a la definición dada por la legislación anterior la exigencia de que dicho dispositivo electrónico permita un acceso no discriminatorio y disponible de forma general, así como la garantía del registro inalterable de todas las participaciones en el proceso de subasta.

**Presupuestos:**

Según establece el artículo 143.2 la subasta electrónica puede emplearse siempre que:

* Las especificaciones del contrato puedan establecerse de forma precisa.
* Que las prestaciones que constituyen su objeto no tengan carácter intelectual.
* Se excluyen expresamente los servicios de ingeniería, consultoría y arquitectura.
* Tampoco podrá ser utilizado para procedimientos que tengan que ver con la calidad alimentaria (Novedad de la LCSP 2017 introducida como enmienda parlamentaria)
* Que no se recurra a las subastas electrónicas de forma abusiva o de modo que se obstaculice, restrinja o falsee la competencia o que se vea modificado el objeto del contrato.

**Procedimientos en los que se pueden utilizar la subasta electrónica.**

Como ya se ha señalado la subasta electrónica no es un procedimiento de adjudicación, si no un medio a través del cual se podrán llevar a cabo procedimientos de contratación que deberán seguir las normas específicas de cada procedimiento con las peculiaridades establecidas en el artículo 143 para la subasta electrónica. En concreto ser podrá utilizar la subasta electrónica en los siguientes procedimientos:

-Procedimiento abierto.

-Procedimiento restringido.

-Procedimiento negociado.

**Criterios de adjudicación**.

La subasta electrónica se basará en uno de los siguientes criterios:

**a)** únicamente en los precios, cuando el contrato se adjudique atendiendo exclusivamente al precio;

**b)** o bien en los precios y en nuevos valores de los elementos objetivos de la oferta que sean cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o en porcentajes, cuando el contrato se adjudique basándose en varios criterios de adjudicación.

Nótese que a diferencia de lo que establece el artículo 146 de la LCSP 2017 en donde se permite que en caso de optar por un único criterio de adjudicación, este no tenga porqué ser el criterio precio pudiendo funcionar como único criterio de adjudicación criterios basados en la rentabilidad como el coste del ciclo de la vida, en el caso de las subastas electrónicas el criterio precio siempre ha de estar presente, bien como único criterio o bien acompañado de otros criterios.

**Como funciona.**

A.-Preparación

Antes de poder realizarse ese procedimiento repetitivo electrónico en que consiste la subasta es necesario aprobar unos pliegos de cláusulas administrativas que regulen el procedimiento de contratación y anuncia públicamente que se va a realizar una subasta electrónica.

Según el artículo 143.4 de la LCSP 2017 el órgano de contratación que decida recurrir a una subasta electrónica deberá incluir en el pliego de condiciones la siguiente información:

**a)** Los elementos objetivos a cuyos valores se refiera la subasta electrónica.

**b)** En su caso, los límites de los valores que podrán presentarse, tal como resulten de las especificaciones relativas al objeto del contrato.

**c)** La información que se pondrá a disposición de los licitadores durante la subasta electrónica y, cuando proceda, el momento en que se facilitará.

**d)** La forma en que se desarrollará la subasta.

**e)** Las condiciones en que los licitadores podrán pujar y, en particular, las mejoras mínimas que se exigirán, en su caso, para cada puja.

**f)** El dispositivo electrónico utilizado y las modalidades y especificaciones técnicas de conexión.

Una vez elaborado el pliego y aprobado el expediente de contratación deberá procederse a **publicar el anuncio** de licitación en donde ser hará constar que se procederá a realizar una subasta electrónica.

B.-Fases del proceso.

Se mantienen la división en dos fases que ya establecía la legislación anterior:

1.-Evaluación completa de las ofertas.

2.-Subasta electrónica propiamente dicha.

1.-Evaluación previa.

Antes de proceder a la subasta electrónica propiamente dicha, el órgano de contratación efectuar una primera evaluación completa de las ofertas de conformidad con los criterios de adjudicación.

Una oferta se considerará admisible cuando haya sido presentada por un licitador que no haya sido excluido y que cumpla los criterios de selección, y cuya oferta sea conforme con las especificaciones técnicas sin que sea irregular o inaceptable, o inadecuada, en los términos de los artículos 167 y 168 de la LCSP.

Los resultados de esta evaluación deberán hacerse constar en la invitación que se remite posteriormente y en todo caso conviene recordar que el acto que pone fin a esta primera fase de evaluación completa de las ofertas, tiene la consideración de acto de trámite cualificado ( Resolución núm. 837/2014 de 7 de noviembre del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales)

2.-Subasta electrónica propiamente dicha.

Una vez finalizada la fase de evaluación previa comenzará la subasta electrónica en la que a su vez podemos dividir en las siguientes fases:

1. **Invitación electrónica a la subasta.**
2. **Inicio de la subasta electrónica.**
3. **Valoración automática.**
4. **Cierre de la subasta electrónica.**

1.-Invitación electrónica a la subasta.

Esta invitación debe:

-Ser remitida (obviamente) por medios electrónicos a todos los licitadores.

-Incluirá toda la información pertienente para la conexión individual al dispositivo electrónico utilizado.

-Precisará la hora y fecha de comienzo de la subasta electrónica.

-Indicará el resultado de la evaluación completa de la oferta del licitador que se trate.

-Indicará igualmente la fórmula matemática que se utilizará para la reclasificación automática de las ofertas en función de los nuevos precios, revisados a la baja, o de los nuevos valores, que mejoren la oferta, que se presenten.

En caso de que se autorice la presentación de variantes, se proporcionará una fórmula para cada una de ellas.

2.-Inicio de la subasta electrónica.

Entre la fecha de envío de las invitaciones y el comienzo de la subasta electrónica habrán de transcurrir, al menos, dos días hábiles.

3.-Valoración automática de las ofertas.

A medida que los licitadores vayan presentando sus ofertas existirá una valoración automática de las mismas a través de procedimientos electrónicos.

El proceso de subasta podrá realizarse en varias fases sucesivas.

A lo largo de cada fase de la subasta, y de forma continua e instantánea, se comunicará a los licitadores, como mínimo, la información que les permita conocer su respectiva clasificación en cada momento.

Adicionalmente, se podrán facilitar otros datos relativos a los precios o valores presentados por los restantes licitadores, siempre que ello esté contemplado en el pliego que rige la licitación, y anunciarse el número de los que están participando en la correspondiente fase de la subasta, sin que en ningún caso pueda divulgarse su identidad.

4.-Cierre de la subasta electrónica.

El cierre de la subasta se fijará por referencia a uno o varios de los siguientes criterios:

**a)** Mediante el señalamiento de una fecha y hora concretas, que deberán ser indicadas en la invitación a participar en la subasta.

**b)** Atendiendo a la falta de presentación de nuevos precios o de nuevos valores que cumplan los requisitos establecidos en relación con la formulación de mejoras mínimas.

De utilizarse esta referencia, en la invitación a participar en la subasta se especificará el plazo que deberá transcurrir a partir de la recepción de la última puja antes de declarar su cierre.

**c)** Por finalización del número de fases establecido en la invitación a participar en la subasta. Cuando el cierre de la subasta deba producirse aplicando este criterio, la invitación a participar en la misma indicará el calendario a observar en cada una de sus fases.

Una vez que se produzca el cierre de la subasta se procederá a la adjudicación del contrato conforme a lo previsto en el artículo 150 (reglas generales de adjudicación del contrato).

**Supuestos recomendados de utilización de la subasta electrónica.**

Carlos V. Ruiz Rubia en su artículo “la subasta electrónica como método de adjudicación” señala una serie de condiciones que a su juicio deben darse al margen de las condiciones legales ya analizadas, para que la utilización de la subasta electrónica resulte exitosa, entre ellas:

-Que exista un ahorro cuantificable y atractivo para la empresa/organismo.

-Mercado amplio con potenciales licitadores en cantidad suficiente y de probada competitividad y cuya solvencia seamos capaces de 'verificar' previamente a partir del cumplimiento de las condiciones de participación definidas en nuestros pliegos de cláusulas administrativas particulares

-Costes de implementación de la herramienta asumibles y amortizables a partir de los ahorros obtenidos.

-Un producto que se pueda definir y valorar de forma clara y concreta en nuestros pliegos de prescripciones técnicas, para evitar la adquisición de aquello que no queremos.

-Y por último cantidades e importes atractivos para los potenciales participantes.

Y señala igualmente una serie de servicios y suministros que resultarían aptos para la adjudicación mediante subasta electrónica:

Suministro y mantenimiento de equipos informáticos (PC,s, ordenadores portátiles, servidores, etc.)

Suministro y distribución de material de oficina no inventariable

Suministro y distribución de material informático no inventariable

Suministro de equipos de comunicaciones

Suministro de materias primas diversas

Servicios de transporte de mobiliario

Suministro de energía eléctrica

Suministro de equipos de seguridad y control

Servicios de vigilancia y seguridad privada

Suministro de medicamentos

Servicios de operador logístico

En todas ellas se aprecia una importante característica de este tipo de contratos susceptibles de adjudicarse mediante e-subasta: una escasa o nula importancia de las prestaciones de carácter intelectual.

La calidad en el suministro o en el servicio, que evidentemente no va a ser objeto de subasta, deberemos ser capaces de definirla con exactitud en pliegos, así como la manera de verificar que los participantes en ella están capacitados para prestarla o aportarla en el producto ofertado sin riesgo de desviaciones posteriores, para ello utilizaremos todos los medios que la actual legislación pone a nuestro alcance, mediante la exigencia previa de solvencia técnica o solvencia económico-financiera suficiente y obligando al licitador a aportar toda la documentación, muestras, informes, etc. que estimemos necesaria para garantizarnos tal extremo durante toda la vida del contrato.

**En conclusión** la subasta electrónica se configura como un instrumento electrónico asociado al propósito, de impulsar e imponer el uso de las comunicaciones electrónicas y el procesamiento electrónico de las transacciones en el ámbito de la contratación pública, debiendo garantizarse en todo caso, los principios generales y básicos de la contratación pública y con el fin de poder conseguir un mayor ahorro en las contrataciones públicas.

Sin embargo se trata de un mecanismo poco o nulamente utilizado aún por las entidades locales y poco por las restantes Administraciones Públicas. Sin embargo si podemos ver algunos ejemplos.

**Ejemplo 1.-Pliego de cláusulas Administrativas y Prescripciones técnicas para el suministro de energía eléctrica para el Campus de la la Universidad de Almería.**

*8.1 Procedimiento de adjudicación*

*La adjudicación del contrato se llevará a cabo por procedimiento abierto y regulación armonizada, de acuerdo con lo previsto en los artículos 122, 141 y 15 de la LCSP, al concurrir en el mismo las circunstancias exigidas por la citada disposición.*

*A efectos de la adjudicación del contrato se celebrará una subasta electrónica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 132 de la LCSP. Las condiciones y requisitos para participar en la subasta electrónica figuran detalladas en el anexo VIII.*

*El único criterio de adjudicación será el del precio más bajo*.

*9.1 Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.*

*Las proposiciones, así como en su caso las solicitudes de participación, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio:*

*La fecha límite de presentación de proposiciones será el día 14 de Enero de 2011 a las 19 horas.*

*La presentación de proposiciones para este procedimiento se realizará exclusivamente a través de la plataforma electrónica de contratación pública vortalGOV.*

Después de la apertura electrónica del Sobre A

*Por la Presidencia de la Mesa de Contratación se procederá, en el acto público, a manifestar el resultado de la calificación de los documentos presentados con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas. A continuación se realizará la apertura de los sobres B y C de aquellas empresas que continúen en el proceso de adjudicación, dando lectura a las ofertas Económicas de la Empresas Licitantes.*

Y una vez hecho esto se procede a la subasta electrónica en si, estableciendo los pliegos:

10.4. Procedimiento de la subasta electrónica:

*Las condiciones y requisitos para la participación en la subasta electrónica figuran descritos en el anexo VIII de este Pliego.*

*La subasta electrónica se realizara en dos fases de acuerdo con las normas e instrucciones establecidas en el anexo VIII de este Pliego.*

*A lo largo de cada fase de la subasta, se comunicará a los licitadores, a través de la plataforma electrónica de contratación vortalGOV (www.vortalgov.es), como mínimo, la información que les permita conocer su respectiva clasificación en cada momento, sin que en ningún caso pueda divulgarse su identidad.*

*Una vez concluida la subasta electrónica, la Mesa de Contratación realizará la clasificación de las empresas en orden decreciente sobre la puntuación obtenida por éstas.*

**Ejemplo 2.- Pliego de cláusulas administrativas particulares de la Generalidat Valenciana para la contratación administrativa basada en el acuerdo marco de contratación centralizada del suministro de papel para la impresión y escritura con criterios medioambientales, mediante subasta electrónica.**

En este caso se trataría también de la licitación de un elemento perfectamente determinado en el pliego en cuanto a cantidad, requisitos de calidad, etc…como el papel y la subasta se celebraría exclusivamente entre aquellos empresarios que previamente hubiesen suscrito un acuerdo marco.

*La subasta electrónica versará sobre pujas a la baja sobre el precio unitario de cada subgrupo de licitación establecido en la cláusula 5.3 de este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.*

11*.1. Invitación a los licitadores*

*Una vez efectuada la evaluación de las ofertas de conformidad con lo establecido en la cláusula anterior, el órgano de contratación invitará, simultáneamente, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, todos los licitadores señalados en la cláusula 9 de este Pliego a que presenten nuevos precios revisados a la baja que mejoren los precios máximos unitarios de licitación señalados en la cláusula 5.3 de este Pliego, procediendo a celebrar una subasta electrónica sobre pujas a la baja sobre el precio unitario de cada subgrupo de licitación establecido en cláusula 5.3 de este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con arreglo a lo previsto en el art. 148 del TRLCSP.*

*d) Duración de la subasta*

*La duración inicial de la subasta será de 20 minutos más las posibles extensiones, durante los cuales se realiza el proceso de pujas por parte de los licitadores, sin perjuicio de la posible suspensión de la misma en caso de incidencias de acuerdo con el apartado f) de esta cláusula.*

*En cuanto a las extensiones si dentro de los últimos 2 minutos antes del cierre se produjera una puja válida que sitúe al licitador que la envía en alguna de las tres mejores posiciones, el sistema prorrogará la subasta electrónica 5 minutos para permitir la reacción del resto de licitadores.*

*El número de extensiones en esta fase real es ilimitado. Por lo tanto, la duración total de subasta electrónica probablemente excederá el tiempo inicial estimado.*

(Se adjuntan los pliegos comentados como documentación anexa al curso).

**2.-EL ACUERDO MARCO.**

2.1.-Concepto y finalidad.

Al igual que ya establecía el TRLCSP, la LCSP 2017 establece una serie de sistemas para intentar lograr una mayor racionalización en la contratación de las Administraciones Públicas, y así el artículo 218 establece que: “*Para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos las Administraciones Públicas podrán concluir acuerdos marco, articular sistemas dinámicos, o centralizar la contratación de obras, servicios y suministros en servicios especializados, conforme a las normas de este capítulo*.”

Ninguno de estos se trata de un tipo de contrato nuevo ni tampoco son procedimientos de adjudicación de los contratos, si no sistemas que pueden referirse a cualquier tipo de contrato (obras, servicios, suministros etc…) y que a su vez podrán licitarse a través de los distintos procedimientos de licitación admitidos para esos tipos de contratos (abierto, restringido etc…).

Estos sistemas pese a aparecer ya regulados en la anterior normativa de contratación no han sido utilizados masivamente en el ámbito de la contratación de las Entidades Locales, si bien, la limitación establecida ahora en orden a la formalización de contratos menores con un mismo empresario, así como la reducción del límite de contratación menor, así como la desaparición del contrato negociado sin publicidad por razón de la cuantía, los convierten en un instrumento que podría ser realmente útil en muchos ámbitos de la actuación de las corporaciones locales en las que se reiteran gastos a lo largo de un ejercicio presupuestario de cierta urgencia o necesidad pero cuya necesidad es imprevisible en el tiempo (ejemplo asistencia letrada en juicio, suministro de material de oficina, recogida de animales abandonados, reparación de baches etc…)

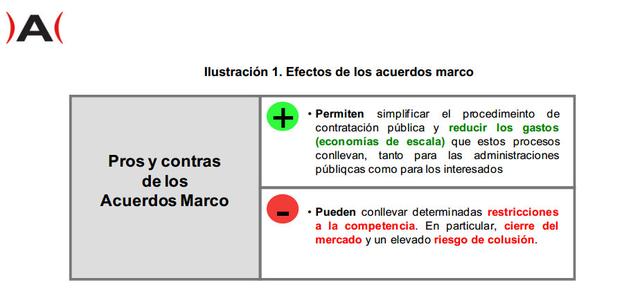
Centrándonos ya en los acuerdos marco, el artículo 219.1 de la LCSP 2017 establece que:

*“Uno o varios órganos de contratación del sector público podrán celebrar acuerdos marco con una o varias empresas con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos que pretendan adjudicar durante un período determinado, en particular por lo que respecta a los precios, y en su caso, a las cantidades previstas, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma abusiva o de modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada*.”

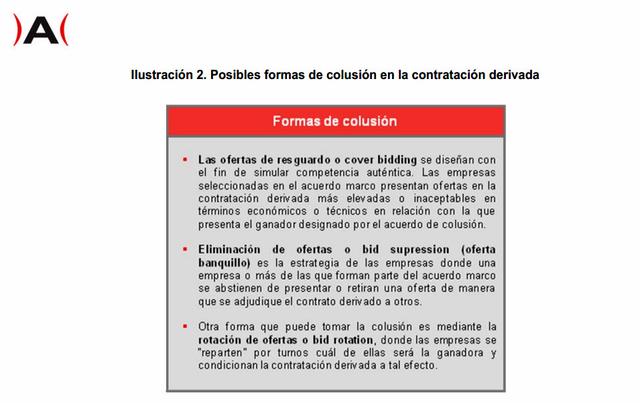
De esta forma fija las características de estos acuerdos marco que podemos resumir:

1. Podrán ser uno o varios órganos de contratación del sector público los que puedan celebrarlo.
2. Se podrán alcanzar con una o varias empresas.
3. Su finalidad será fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos que pretendan adjudicar durante un período determinado de tiempo, en particular por lo que respecta a los precios.
4. No pueden utilizarse de forma abusiva o de modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.

La finalidad del acuerdo marco es conseguir la eficiencia en la tramitación de los expediente de contratación, si bien, su utilización también puede acarrear **efectos negativos en la competencia**.



La Autoridad Catalana de la Competencia en la publicación "[Acuerdos Marco en el ámbito de la contratación pública: Guía para un uso pro-competitivo. Mayo 2013](http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/03_guia_acord_marc_contr_publica_esp.pdf)" señala que: "la utilización de los acuerdos marco puede generar determinadas restricciones a la competencia ***en forma de cierre del mercado objeto del acuerdo marco*** que, a su vez, puede llevar asociado un elevado riesgo de [***colusión***](http://dle.rae.es/?id=9s5urAc) en los contratos derivados posteriores. Este cierre se genera en la medida que las empresas que no puedan entrar a formar parte de este acuerdo no podrán optar tampoco a la contratación que se derive de los mismos. Así es que, a raíz de dicho cierre, se incrementa el riesgo de colusión en la contratación derivada ya que se propicia la creación de un entorno reducido y cerrado en el que todos los operadores se conocen entre sí" y señala las siguientes formas de colisión:



Por lo tanto la finalidad de estos acuerdos marco es fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos que pretendan adjudicar durante un período determinado de tiempo. Tales acuerdos han de fijar todas las condiciones, no siendo suficiente que queden el resto abiertas o susceptibles de definirse en un futuro.

El Informe de la IGAE de 2 de octubre de 2008, considera que un acuerdo marco fija todas las características “cuado se haya determinado tanto los elementos estructurales del contrato como el contenido obligacional del mismo, de tal forma que sea posible concluir el contrato sin necesidad de aportar nuevos elementos o condiciones al mismo ni firmar un nuevo pacto.

Las normas o instrucciones que puedan establecer los requisitos de la elección de la empresa que haya de ejecutar los contratos derivados, no tienen naturaleza contractual y por tanto su existencia o no existencia es indiferente de cara a la determinación de si los términos del contrato están o no totalmente fijados por el acuerdo marco.”

De esta forma y teniendo en cuenta la definición aportada por el artículo 219.1 de la LCSP 2017 podemos clasificar los acuerdos marco de la siguiente forma:

1. Acuerdo marco CERRADO (están perfectamente definidos todos los términos para ejecutar el contrato derivado y por tanto no hay una segunda fase de selección que puede ser a su vez:

a.1) Cerrado con diversos operadores: la Administración lo formaliza con varias empresas.

a.2) Cerrado con un solo operador: La Administración lo formaliza con una sola empresa (hay autores que realmente no lo consideran como un acuerdo marco estricto sensu)

1. Acuerdo marco ABIERTO. (No están perfectamente definidos todos los términos para la ejecución del contrato derivado) que puede ser:

b.1) Abierto con diversos operadores: con varias empresas, precisará de segunda etapa de selección.

b.2) Abierto con un solo operador: con una sola empresa, no hay segunda etapa de selección pero restaría completar la oferta.

En cualquiera de los distintos tipos de acuerdos marco señalados cabrá la posibilidad de diferenciar siempre dos fases:

**Fase** **1**: celebración del acuerdo marco.

**Fase** **2**: adjudicación de los contratos derivados del acuerdo marco.

2.2 Duración del acuerdo marco y de los contratos derivados del acuerdo marco.

Conforme establece el artículo 219 LCSP 2017

2*. La duración de un acuerdo marco no podrá exceder de cuatro años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados. En todo caso, la duración del acuerdo marco deberá justificarse en el expediente y tendrá en cuenta, especialmente, las peculiaridades y características del sector de actividad a que se refiere su objeto.*

***3.*** *La duración de los contratos basados en un acuerdo marco será independiente de la duración del acuerdo marco, y se regirá por lo previsto en el artículo 29 de la presente Ley, relativo al plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación, así como por los pliegos reguladores del acuerdo marco.*

*Solo podrán adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia del acuerdo marco. La fecha relevante para entender que se ha cumplido este requisito será:*

***a)*** *En el caso de contratos basados que para su adjudicación, de acuerdo con el artículo 221 requieran la celebración de una licitación, la fecha de envío a los adjudicatarios del acuerdo marco de las invitaciones para participar en la licitación, siempre que las propuestas de adjudicación se reciban dentro del plazo establecido para ello en el acuerdo marco correspondiente.*

***b)*** *En el caso de contratos basados cuya adjudicación no requiera la celebración de licitación, la fecha relevante será la de la adjudicación del contrato basado.*

2.3.-Procedimiento de celebración de los acuerdos marco y valor estimado.

El procedimiento para la celebración de tales acuerdos marco se regirá por las normas generales de licitación de los contratos siendo por lo tanto posible su licitación mediante procedimiento abierto, restringido, negociado etc…

Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada la posibilidad de formalizar contratos sobre la base de acuerdos marco estará condicionada a que en el plazo de 30 días a contar desde su formalización se haya enviado anuncio de tal formalización a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

Por lo que respecta al valor estimado de estos acuerdos marcos será el valor del conjunto de contratos derivados que se prevean celebrar durante la duración total de acuerdo marco, más las eventuales prórrogas y excluido el IVA.

Ahora bien, cabe plantearse si para la celebración de estos acuerdos marco es necesario la realización de algún tipo de retención de crédito. A este respecto debemos tener en cuenta que los acuerdos marco tienen natura precontractual y por lo tanto no significa la realización inmediata de un gasto y por tanto, su celebración no conllevará la emisión de ningún documento de gestión presupuestaria (Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Aragón, Informe 8/2010, de 23 de junio). Ni tampoco será necesario que se tome razón de la existencia de un compromiso plurianual en el caso de que el acuerdo marco se prolongue más de un ejercicio.

Cabe plantearse si ese valor estimado de los acuerdos marco puede ser superado. En principio podría pensarse que dicho valor estimado actuaría como límite infranqueable de tal forma que la suma de los contratos derivados o surgidos al amparo de ese acuerdo marco, no pudiese sobrepasar dicho límite. Sin embargo tanto la Junta Consultiva de Contratación del Estado en informe 17/2012 como la Junta Consultiva de Contratación de Baleares en informe 9/2013 han considerado que no existe tal límite.

Se deduce pues que hemos de entender que el valor estimado del acuerdo marco no supone un techo jurídico y económico que no se pueda superar. La Junta de Baleares concluye que este valor estimado de los acuerdos marco no constituye límite cuantitativo para los contratos derivados y por tanto es posible que el total de estos supere aquél, si bien añade que sería conveniente que se adoptara cualquier medida para evitar que la diferencia entre el total de contratos derivados y el valor estimado fijado en su día para el acuerdo marco llegue a ser manifiestamente desproporcionado. En la misma línea se sitúa la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado cuando en su informe 17/2012, concluye que el valor estimado de los acuerdos marco no constituye un límite cuantitativo para los contratos que se puedan hacer derivados de este acuerdo marco.

Respectando en todo caso la opinión de las Juntas Consultivas no parece muy recomendable que la suma de los contratos derivados supere el valor estimado en su día fijado para el acuerdo marco y así lo defienden autores como Teresa Moreo Marroig.

2.4.-Adjudicación de los contratos basados en el acuerdo marco.

No supone excesiva innovación respecto a la regulación del TRLCSP, en todo caso una vez formalizado el acuerdo marco, y a medida que vaya surgiendo la necesidad de la contratación, deberá procederse a la adjudicación sucesiva de estos contratos.

Primeramente será necesario realizar la correspondiente certificación de crédito por el importe máximo que vaya a alcanzar el citado contrato. Una vez certificado el crédito se seguirá el procedimiento regulado en el artículo 221 de la LCSP 2017.

Solo podrán celebrarse contratos basados en un acuerdo marco entre las empresas y los órganos de contratación que hayan sido originariamente partes en el mismo, salvo los acuerdos marco celebrados por centrales de contratación.

Cabe diferenciar dos supuestos:

1. Acuerdo marco formalizado con una única empresa.

Si es CERRADO (todos los términos están perfectamente fijados) se adjudicará con arreglo a los términos establecidos en ese acuerdo marco. En todo caso, será un procedimiento sencillo, (simple acuerdo o resolución de adjudicación).

Si fuese ABIERTO se consultará por escrito al empresario para que complete su oferta y posteriormente se adjudicará con las condiciones del contrato ofertadas.

1. Acuerdo marco formalizado con varias empresas.

Si es CERRADO y fija todos los términos y condiciones, puede establecer una nueva licitación o no.

La posibilidad de aplicar ambos sistemas deberá estar prevista en el pliego regulador del acuerdo marco y dicho pliego deberá determinar los supuestos en los que se acudirá o no a una nueva licitación, así como los términos que serán objeto de la nueva licitación, si este fuera el sistema de adjudicación aplicable. Para poder adjudicar contratos basados en un acuerdo marco con todos los términos definidos sin nueva licitación, será necesario que el pliego del acuerdo marco prevea las condiciones objetivas para determinar qué empresa parte del acuerdo marco deberá ser adjudicatario del contrato basado y ejecutar la prestación.

SI es ABIERTO invitando a una nueva licitación a las empresas parte del acuerdo marco, licitación que concretará las condiciones.

En el caso de que se produzca licitación esta deberá ajustarse a las siguientes condiciones:

1.- La licitación se basará, bien en los mismos términos aplicados a la adjudicación del acuerdo marco, precisándolos si fuera necesario, bien en otros términos. En este último caso, será necesario que dichos términos hayan sido previstos en los pliegos de contratación del acuerdo marco y se concreten con carácter previo a la licitación para la adjudicación del contrato basado.

Por otra parte, si los pliegos del acuerdo marco no recogieran de forma precisa la regulación aplicable a los contratos basados, esta deberá necesariamente incluirse en los documentos de licitación correspondientes a dichos contratos basados.

2.- Por cada contrato que haya de adjudicarse se invitará a la licitación a todas las empresas parte del acuerdo marco que, de acuerdo con los términos de la adjudicación del mismo, estuvieran en condiciones de realizar el objeto del contrato basado. La invitación se realizará por los medios que se hubieran establecido a tal efecto en el pliego regulador del acuerdo marco.

No obstante lo anterior, cuando los contratos a adjudicar no estén sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá decidir, justificándolo debidamente en el expediente, no invitar a la licitación a la totalidad de las empresas, siempre que, como mínimo, solicite ofertas a tres.

3.- Se concederá un plazo suficiente para presentar las ofertas relativas a cada contrato basado teniendo en cuenta factores tales como la complejidad del objeto del contrato, la pluralidad o no de criterios de valoración, así como su complejidad, y el tiempo necesario para el envío de la oferta.

4.- Las ofertas se presentarán por escrito y su contenido será confidencial hasta el momento fijado para su apertura.

5.- El órgano de contratación podrá optar por celebrar la licitación para adjudicar los contratos basados en un acuerdo marco a través de una subasta electrónica para la adjudicación del contrato basado conforme a lo establecido en el artículo 143 de la presente Ley, siempre que así se hubiera previsto en los pliegos reguladores del acuerdo marco.

6.- El contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP 2017, valorada según los criterios fijados en el acuerdo marco.

7.- La notificación a las empresas no adjudicatarias de la adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco, podrá sustituirse por una publicación en el medio determinado en los pliegos reguladores del acuerdo marco.

2.5.-La modificación de los acuerdos marco y de los contratos derivados.

Se regula ahora en el artículo 222 de la LCSP que establece las siguientes características:

* Tanto los acuerdos marco como los contratos basados en ellos podrán modificarse conforme a las reglas generales de modificación de contratos.
* Sin embargo no podrán introducir a través de modificaciones en el contrato basado modificaciones sustanciales respecto a lo establecido en el acuerdo marco.
* Los precios unitarios resultantes de la modificación del acuerdo marco no podrán superar en un 20 por ciento a los precios anteriores a la modificación y en ningún caso podrán ser precios superiores a los que las empresas parte del acuerdo marco ofrezcan en el mercado para los mismos productos.
* Los adjudicatarios de un acuerdo marco podrán proponer al órgano de contratación la sustitución de los bienes adjudicados por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio no incremente en más del 10 por 100 el inicial de adjudicación, salvo que el pliego de cláusulas administrativas particulares, hubiese establecido otro límite.
* Además, el órgano de contratación, por propia iniciativa y con la conformidad del suministrador, o a instancia de este, podrá incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o similares al mismo cuando concurran motivos de interés público o de nueva tecnología o configuración respecto de los adjudicados, cuya comercialización se haya iniciado con posterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas, siempre que su precio no exceda del limite del 10% o el que hubiese establecido el pliego.

En definitiva el acuerdo marco resulta una figura útil para una respuesta rápida a necesidades que previsiblemente se producirán en el futuro de la Administración que se reiteran en el tiempo con asiduidad pero que resulta difícil a priori poder determinar el número de veces que se necesitarán y la cantidad o importe que se va a necesidad.

Conviene a los efectos de una mayor claridad citar algún ejemplo: (se facilitan los pliegos de todos ellos como material adjunto).

* **Acuerdo marco con un único empresario para el suministro de material de oficina no inventariable ( material de escritorio) con destino a la sede central y servicios periféricos de la Dirección General de la Marina Mercante**,

Se trata de un acuerdo marco para suministrar material de oficina en donde se describen todos los elementos del contrato, se licita mediante procedimiento abierto seleccionando a un único empresario de tal forma que se trataría de un acuerdo marco cerrado. En cuanto a los contratos derivados de este acuerdo marco la cláusula 16 bis) establece:

“*Realizada la selección la Junta de Contratación, celebrará el contrato de suministro de material objeto del presente acuerdo marco con la empresa que resulte adjudicataria. Las adjudicaciones derivadas de este Acuerdo marco ser realizarán por el siguiente procedimiento, en atención a lo regulado en el artículo 198.3 del TRLCSP.*

*Procedimiento único:*

*Los contratos derivados se realizarán aplicando todos los términos fijados en este Acuerdo marco. No será necesario volver a convocar a las partes para una nueva licitación*.”

Por lo tanto una vez adjudicado el acuerdo marco la formalización de los contratos basados en el mismo consistirá en la simple formalización de un nuevo pedido de material.

* **Acuerdo marco para la homologación de proveedores de servicios de reparación de vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de Valladolid y Organismos Municipales**.

En este caso se trataría de un acuerdo marco dividido en lotes cuyo objeto sería:

Lote I: Reparaciones de carrocería y pintado de turismos, todo terrenos y furgonetas.

Lote II: Reparaciones de carrocería y pintado de camiones y tractores.

Lote III: Trabajos de calderería

Lote IV: Mecánica general y trabajos de electricidad y electrónica en vehículos pesados

Lote V. Mecánica general y trabajos de electricidad y electrónica en vehículos ligeros.

Lote VI. Mecánica general, trabajos de electricidad y de electrónica en motocicletas.

Lote VII. Reparación de maquinaria (motosierras, desbrozadores, tractores de siega, sopladores, etc)

La duración del acuerdo marco sería de 2 años prorrogables.

El pliego fija un plazo para que los licitadores presenten sus ofertas, establece igualmente los criterios de adjudicación (reducción de precio, condiciones medioambientales, ampliación de plazo de garantía etc….) requisitos de solvencia técnica y económica…tras la tramitación se procederá a homologar a todas aquellas empresas que cumplan los requisitos del pliego.

El funcionamiento del acuerdo marco se describe de la siguiente forma:

1. La homologación supone, durante su período de vigencia, la obligación del Ayuntamiento de Valladolid O DE LOS SERVICIOS INDICADOS EN ESTA HOMOLOGACION de no contratar con ningún proveedor no homologado ninguno de los servicios comprendidos en los lotes descritos en el Cuadro de Características, SALVO POR FALTA DE CAPACIDAD TÉCNICA PARA DETERMINADAS AVERÍAS.

Quedan excluidos de este Pliego los periodos de garantía de los vehículos y maquinaria los adquiridos mediante leasing o renting.

2. La homologación no produce la conversión automática de los licitadores homologados en PRESTADORES efectivos de los servicios mencionados.

3. Tal carácter de PRESTADOR sólo se alcanzará tras los oportunos procedimientos de contratación que se tramiten durante la vigencia de la homologación para la prestación de determinado número de los trabajos de reparación comprendidos en cualquiera de los lotes descritos, número que se fijará en función de las necesidades puntuales de los Servicios del Ayuntamiento de Valladolid y organismos municipales, sin que la homologación comporte para la misma obligación alguna de contratar un número mínimo de los citados trabajos.

4. La homologación conlleva la obligación de los proveedores homologados de presentar oferta a todos los procedimientos de contratación derivados de la misma que el Ayuntamiento de Valladolid promueva entre ellos.

5. Los precios, los plazos de garantía y las características de los trabajos contenidos en la oferta de cada licitador, origen de su homologación, serán vinculantes como límite máximo de las ofertas que presenten para cada uno de los TRABAJOS, siempre que desde el Ayuntamiento de Valladolid no se varíen para su convocatoria las condiciones recogidas en el pliego de prescripciones técnicas que rigen esta contratación. Las ofertas para cada convocatoria podrán mejorar las presentadas para la licitación del Acuerdo Marco.

El procedimiento de adjudicación y formalización de los sucesivos contratos en que se concrete el desarrollo del acuerdo marco de homologación se regirá por las siguientes prescripciones:

Se distinguen tres supuestos diferentes de funcionamiento:

**1. Contratos de valor inferior a 6.000 euros más IVA**, conforme a la Base 29 de ejecución del Presupuesto Municipal 2016 se podrá solicitar una única oferta. El servicio que encargue la reparación deberá comprobar el presupuesto y la factura final al objeto de informar que se ajustan a las condiciones establecidas en el presente contrato marco.

**2. Reparaciones con un valor superior a 6.000 euros más IVA**, **hasta 18.000 euros más**

**IVA** de acuerdo con la Base 29 del Presupuesto Municipal de 2016, se solicitarán 3 presupuestos y se elegirá la mejor oferta en base a la baja respecto a las condiciones iniciales del acuerdo marco.

**3. Reparaciones que superen los 18.000 euros más IVA.**

En aplicación de la regulación dispuesta en la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, que regula los acuerdos marco en su art.33, el procedimiento a aplicar cuando la reparación supere los 18.000 euros es el siguiente:

a) Para cada contrato que haya que adjudicar, los poderes adjudicadores consultarán por escrito todos los talleres homologados en cada lote.

b) El ayuntamiento fijará en el pliego un plazo suficiente para presentar las ofertas relativas a cada contrato específico, teniendo en cuenta factores como la complejidad del objeto del contrato y el tiempo necesario para el envió de la oferta.

c) Las ofertas se presentarán por escrito y su contenido no se hará público hasta que expire el plazo previsto para responder a la convocatoria.

d) El ayuntamiento adjudicará cada contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta, basándose en los criterios de adjudicación detallados en los pliegos de la contratación de este acuerdo marco.

Se exceptúa de este procedimiento, cuando por razones técnicas sea necesario llevar el vehículo o la maquinaria directamente al fabricante.

Por lo tanto sería un ejemplo tanto de acuerdo marco con varios empresarios, pero abierto, ya que sin sobrepasar la cuantía y condiciones ofertadas en el momento del acuerdo marco si pueden mejorar esas condiciones en el momento de la adjudicación de la adjudicación.

* **Acuerdo marco de asistencia jurídica del Ayuntamiento de Oroso.**

Se trata en este caso de un acuerdo marco cuyo objeto sería la selección de un único profesional al que se le adjudicarían los distintos contratos basados a medida que vayan surgiendo litigios contra el Ayuntamiento.

Se fijan además diferentes precios de licitación según el tipo de instancia y el resultado de los litigios de la siguiente forma:

1. Una cantidad fija por cada asunto encomendado al contratista de acuerdo con el siguiente baremo:
2. Procedimientos judiciales en primera o única instancia ante órganos jurisdiccionales con sede en la Comunidad Autónoma de Galicia: 800 euros más IVA de 168 euros.
3. Procedimientos judiciales en segunda instancia ante órganos jurisdiccionales con sede en la Comunidad Autónoma de Galicia: 400 euros más IVA de 84 euros.
4. Procedimientos judiciales ante órganos jurisdiccionales con sede fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia, en primera, única o segunda instancia: 1.200 euros más IVA de 252 euros.
5. De conformidad con lo previsto en el artículo 87.4 TRLCSP, una cantidad variable en función del resultado de los pleitos para el ayuntamiento:
6. Por cada pronunciamiento judicial favorable al Ayuntamiento en primera o única instancia: 800 euros más IVA de 168 euros.
7. Por cada pronunciamiento judicial favorable al Ayuntamiento en segunda instancia: 400 euros más IVA de 84 euros.
8. Por cada pronunciamiento judicial favorable al Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo o Audiencia Nacional: 1.200 euros más IVA de 252 euros. (Este concepto excluye los demás de este apartado).

* **Acuerdo marco para la contratación de obras de bacheo de vías, caminos y carreteras municipales del Ayuntamiento de Oroso**.

Igualmente se trata de un acuerdo marco en el que se selecciona a un único contratista en donde:

Las obras objeto de este acuerdo marco se definen con precisión en el anexo técnico y se catalogan al amparo del artículo 122.1 c) del Texto Refundido de la ley de Contratos de Sector Público como obras de conservación y mantenimiento que por su poca entidad económica y falta de complejidad técnica no requieren la redacción de proyecto técnico específico.

El **presupuesto base de licitación** para la totalidad de la duración del contrato, sobre el que los licitadores presentarán oferta a la baja serán los precios unitarios de euros/m2 de las unidades de obras recogidas en el anexo técnico:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UNIDAD** | **BASE** | **IVA** |
| 01.01 m² BACHEO VIALES RIEGO ASFÁLTICO | 7,99 € | 1,68 € |
| 01.02 m² BACHEO VIALES AGLOMERADO | 15,83 € | 3,32 € |
| 01.03 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm. | 4,83 € | 1,01 € |
| 01.04 m2 VIALES AGLOMERADO CON FISURAS | 0,88 € | 0,18 € |

Una vez adjudicado el acuerdo marco los contratos basados se articularán de la siguiente forma:

Detectada la necesidad de los servicios del contratista, a propuesta del supervisor del contrato y acreditada la existencia de crédito presupuestario, se adjudicará el correspondiente contrato por el órgano de contratación, de acuerdo con las tarifas acordadas y demás condiciones del presente pliego, procediéndose a la notificación del contratista mediante el traslado de la hoja de encargo que figura como anexo.

Nota: (Junto con la documentación del presente curso se ponen a disposición modelos de pliegos de cláusulas de acuerdos marco sobre diversas materias y de diversos organismos: para suministro de pintura, suministro de gasoleo para calefacción, obras de reforma y reparación de colegios, suministros de ferretería y fontanería,

**3.-SISTEMAS DINÁMICOS DE CONTRATACIÓN**

**3.1.-Concepto y utilidad.**

Al igual que el acuerdo marco, los sistemas dinámicos de contratación no se trata de un procedimiento de contratación, sino de un sistema que permite la gestión de contratos de determinadas características de forma que dicha contratación resulte más eficiente, ordenada y racional, suponiendo en la mayoría de las ocasiones una economía para la Administración contratante.

El artículo 218 de la LCSP 2017 establece que las Administraciones Públicas podrán concluir acuerdos marco, articular sistemas dinámicos o centralizar la contratación de obras, servicios y suministros en servicios especializados.

No cabrá por la tanto la posibilidad de la utilización de estos sistemas para los contratos de concesión de obras y concesión de servicios a la luz de lo establecido en el artículo 218.

El artículo 223 establece que “los órganos de contratación podrán articular sistemas dinámicos de adquisición de obras, servicios y suministros de uso corriente cuyas características, generalmente disponibles en el mercado, satisfagan sus necesidades, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.”

El sistema dinámico de adquisición se configura como un recurso que permitirá gestionar los gastos de pequeña cuantía repetitivos y previsibles organizándolos racionalmente con la agilidad necesaria, sin acudir a procedimientos de contratación al uso que, dados los plazos de tramitación, causarían en las administraciones públicas una parálisis en la actividad cotidiana, pero garantizando el respeto a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

El sistema dinámico de adquisición es un proceso totalmente electrónico, con una duración limitada y determinada en los pliegos, y debe estar abierto durante todo el período de vigencia a cualquier empresa interesada que cumpla los criterios de selección.

Con carácter previo a la celebración de un sistema dinámico de adquisición no será necesaria la aprobación de un presupuesto base de licitación (art. 100 LCSP 2017). No obstante, sí deberá establecerse el valor estimado mediante el cálculo del valor máximo estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, del conjunto de contratos previstos durante la duración total del sistema dinámico de adquisición.

La experiencia con estos sistemas dinámicos de contratación ha puesto de relieve una serie de ventajas e inconvenientes:

1. **Ventajas:**

1.-Mejora de presupuestos: En entornos de compras repetitivas de hospitales hasta un 30 % en la mejora de precios de productos y servicios.

2.-Concurrencia: Mejor invocación al mercado y mayor respuesta. Se incrementa la oferta.

3.-Transparencia: No existen reclamaciones porque el proceso de adjudicación es transparente y público.

4.-Igualdad de trato: La adjudicación se realiza con una valoración basada en criterios públicos, objetivos, y realizados a través de fórmula matemáticas conocidas.

1. **Inconvenientes**:
   1. Sólo compras de suministros (o servicios) de uso corriente. Dada la forma de invocación y adjudicación debe restringirse esta modalidad de contratación a aquellos bienes o servicios que están muy bien tabulados, con especificaciones técnicas precisas y que no tienen diferenciación en base a innovación o aportaciones intelectuales que no puedan medirse fácilmente (diseño, conocimiento …). Igualmente se hace difícil aunque legalmente posible su aplicación a obras.
   2. Formato exclusivamente electrónico.  Este aspecto puede provocar una mayor brecha digital que la actualmente existente si no se generan las iniciativas de capacitación y formación de todos los agentes que intervienen, sobre todo de las pequeñas y medianas empresa –PYMES-.

El sistema dinámico de contratación ya aparecía regulado en el TRLCS, sin embargo sobre todo a nivel local no ha tenido excesivo éxito. El principal obstáculo que probablemente haya limitado su implantación en el ámbito local haya sido la exigencia de que la totalidad del procedimiento sea un procedimiento electrónico, con lo cual la lentitud en la implantación a nivel local de la Administración electrónica ha frenado las posibilidades de utilización de estos sistemas dinámicos de contratación. Ahora bien, teniendo en cuenta que ahora la LCSP 2017 establece con carácter general y obligatorio la utilización de medios electrónicos en la licitación. Una vez implantados y generalizados estos, puede ser que estos sistemas dinámicos de contratación adquieran un mayor protagonismo en todas las Administraciones Públicas en general y en las Administraciones Locales en particular.

**3.2.- Ventajas sobre los acuerdos marco.**

Frente a la duración de los acuerdos marco, establecida en el artículo 219.2 de la LCSP en un plazo máximo de 4 años, los sistemas dinámicos de adquisición no tienen establecido un plazo máximo, simplemente el artículo 223.2 como acabamos de ver indica que tendrán “una duración limitada y determinada en los pliegos”. (La legislación anterior fijaba un limite para estos sistemas también de 4 años)

Uno de los inconvenientes que se señalaban en el acuerdo marco era el riesgo de que su utilización produjese, durante la duración de dicho acuerdo marco, el cierre del mercado. Efectivamente la celebración o adjudicación de un acuerdo marco se realiza siguiendo las normas del procedimiento abierto y se adjudica a uno o varios empresarios según se indique en los pliegos. Durante la vigencia de dicho acuerdo marco solo podrá adjudicarse contratos basados en dicho acuerdo marco a la empresa o empresas adjudicatarias del acuerdo marco, de esta forma por ejemplo en un acuerdo marco de 4 años de duración, una empresa que fuese creada con posterioridad a la licitación de dicho acuerdo marco, no tendría posibilidad de optar a esos contratos basados durante el plazo de 4 años.

Sin embargo, durante todo el período de vigencia del sistema dinámico de adquisición cualquier empresa interesada podrá solicitar ser admitida en ese sistema dinámico y será seleccionada según su solvencia de forma similar a como se actúa en el procedimiento restringido, presentar oferta cuando se le solicite y ser adjudicataria de un contrato específico procedente de ese sistema dinámico. De esta forma la empresa de nueva creación del ejemplo anterior vería impedida su posibilidad de participar en una posible adjudicación y evitando de esta manera el cierre del mercado.

Desde este punto de vista, el sistema dinámico favorece una mayor libre concurrencia en las adjudicaciones. Los sistemas dinámicos permiten que las empresas mantengan sus oportunidades de negocio independientemente de las incidencias que hubieran podido suceder en un procedimiento de licitación.

**3.3.-Procedimiento**.

Antes de poder adjudicar ningún contrato específico, el sistema dinámico de adquisición en sí mismo no se adjudica, es preciso:

a) Publicar un anuncio de licitación en el perfil de contratante indicando que se trata de un sistema dinámico de adquisición y su periodo de vigencia.

b) Indicar en los pliegos, al menos, la naturaleza y la cantidad estimada de compras previstas, y la información relativa al sistema dinámico de adquisición, el modo de funcionamiento del mismo, el equipo electrónico necesario y las modalidades y especificaciones técnicas de conexión. También toda división en categorías de productos, obras o servicios y las características que definen dichas categorías.

Durante todo el período de vigencia del sistema y desde la fecha de la publicación del anuncio debe ofrecerse un acceso libre, directo y completo, a los pliegos de la contratación.

c) Para contratar en el marco de un sistema dinámico de adquisición y en todo lo no regulado de forma específica, los órganos de contratación seguirán las normas del procedimiento restringido. Frente a esto el TRLCSP establecía que sería de aplicación las previsiones del procedimiento abierto.

**3.4.-. Admisión de empresas**

Durante todo el periodo de vigencia del sistema dinámico de adquisición cualquier empresario interesado podrá solicitar ser admitido al mismo, sin que sea posible limitar el número de empresarios. La aceptación de las solicitudes tiene que realizarse mediante los criterios de solvencia establecidos en los pliegos. El artículo 225.2 de la LCSP indica que “el plazo mínimo para la presentación de las solicitudes de participación será de treinta días, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea” comoquiera que si se aplica de forma literal no podrá garantizarse que durante todo el periodo de vigencia cualquier empresario interesado pueda solicitar ser admitido al mismo, la única forma posible de interpretar este precepto es que se trate del plazo “inicial” de presentación de proposiciones. Por lo tanto, durante los primeros treinta días de vigencia del sistema dinámico, más los diez días como máximo que se emplearán en evaluar las solicitudes, no será posible solicitar ofertas a los licitadores admitidos. Además deberá publicarse igualmente anuncio en el perfil del contratante.

La evaluación de las solicitudes tiene un plazo máximo de diez días, como se ha mencionado antes, pero la LCSP indica que debe informarse “lo antes posible” al interesado de si su solicitud ha sido admitida o no. Dicho plazo podrá prorrogarse a quince días hábiles en casos concretos justificados, en particular si es necesario examinar documentación complementaria o verificar de otro modo si se cumplen los criterios de selección.

Durante todo el periodo de vigencia el órgano de contratación podrá pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos de los extremos indicados en la declaración responsable con la que acreditaron su solvencia, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante si el empresario está inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figura en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, y éstos datos son accesibles de modo gratuito para los órganos de contratación33, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos.

**3.5.-Adjudicación de los contratos específicos**

Cada contrato específico deberá ser objeto de una licitación. En dicha licitación deberá invitarse simultáneamente a todas las empresas previamente admitidas al sistema dinámico de adquisición a presentar una oferta en cada licitación que se celebre en el marco de dicho sistema, la invitación a los candidatos contendrá las indicaciones para permitir el acceso por medios electrónicos a cualquier documentación pertinente.

Dice el artículo 226.3 que el plazo mínimo para la presentación de ofertas será de diez días, contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita. Llama la atención que la LCSP 2017 hable de fecha de envío y no fecha de recepción, aunque entendemos que deberá referirse a la fecha en que efectivamente se haya recibido por el contratista.

Cuando el sistema dinámico de adquisición se hubiera articulado en varias categorías de productos, obras o servicios, los órganos de contratación invitarán a todas las empresas que previamente hubieran sido admitidas en la categoría correspondiente.

Los órganos de contratación adjudicarán el contrato específico al licitador que hubiera presentado la mejor oferta, de acuerdo con los criterios de adjudicación. Cuando proceda, estos criterios podrán formularse con más precisión en la invitación a los candidatos.

Se considerarán irregulares o inaceptables según establece el artículo 167 letra e) de la LCSP 2017 las ofertas que no se ajusten a lo previsto en los pliegos; aquellas que se hayan presentado fuera de plazo; las que muestren indicios de colusión o corrupción; las que hayan sido consideradas anormalmente bajas por el órgano de contratación; o aquellas cuyo precio supere el presupuesto base de licitación. (aunque la aprobación o generación del sistema dinámico no requiere fijar un presupuesto base de licitación, cada contrato basado en el sistema dinámico si tiene que especificar el suyo)

No resulta necesaria la formalización del contrato, se perfeccionan con su adjudicación (art.36.3 y 156) y la presentación de un recurso especial contra la adjudicación no tendrá carácter suspensivo.

**3.6.-Publicidad**.

Como se ha indicado anteriormente debe publicarse un anuncio en el perfil de contratante para iniciar el periodo de vigencia y recibir las solicitudes de participación, al margen que el que ha de remitirse a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

La adjudicación de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, ya perfeccionados se publicará en el perfil del contratante trimestralmente dentro de los 30 días siguientes al fin de cada trimestre.

Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de formalización deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea», debiéndose ser esta la primera publicación al respecto y debiendo indicarse en los demás la fecha de su envío.

Al igual que cualquier otro contrato, los contratos específicos celebrados en el marco de un sistema dinámico de adquisición deberán remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma cuando superen las cuantías establecidas en el artículo 335.1 de la LCSP 2017 (en los mismos supuestos que cualquier otro contrato de obras, servicio o suministro)

Deberá comunicarse al Registro de Contratos del Sector Público, para su inscripción, los datos básicos de los contratos basados, al igual que los del resto de los contratos. Entre estos datos figura: la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Igualmente comunicarán, en su caso, las modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, importe final y extinción de aquellos

Analizada por lo tanto las principales características del sistema dinámico de contratación procede señalar que no es una figura que haya tenido excesivo éxito en el ámbito local, tal vez, como antes se señalaba por la obligación de que la misma tenga que llevarse a cabo electrónicamente en su integridad, aún así podemos citar algún ejemplo como el siguiente:

**Ejemplo.-**

SISTEMA DINÁMICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE BIODIESEL PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS DE GIJON S.A.

Establecen los pliegos de este contrato que su objeto será:

“1.1 OBJETO: El objeto del presente procedimiento es la contratación por parte de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón S.A. (en adelante EMTUSA), del suministro de combustible Biodiesel utilizado por su flota de autobuses.”

Se tratará por lo tanto de un sistema dinámico para la adquisición de un suministro de uso habitual.

“1.3 PROCEDIMIENTO: Se trata de desarrollar un Sistema Dinámico de Contratación (en adelante SDC) de acuerdo con las normas de un procedimiento abierto a lo largo de todas sus fases y hasta la adjudicación, que se hará mediante subasta electrónica.

Este procedimiento permitirá que cualquier operador que lo desee pueda participar en el sistema, para ello deberá presentar una oferta indicativa que cumpla con las condiciones aprobadas y con los criterios de selección predeterminados. Se constituirá de este modo una lista de empresarios aceptados y la posibilidad de ir incorporando a nuevos licitadores, para que de este modo se disponga de una amplia gama de ofertas posibles con el fin de obtener el mejor precio.

En una primera fase los interesados presentarán una oferta indicativa que comprenderá los aspectos señalados en los pliegos y que solo pretende facilitar al órgano de contratación la comprobación de que el producto a suministrar cumple con los requisitos indicados y la empresa cuenta con la capacidad y solvencia suficiente para suministrar el producto con garantías. La oferta definitiva para resultar adjudicatario se presentará en un momento posterior dentro del desarrollo de una subasta electrónica.”

El procedimiento es íntegramente electrónico, a través de subasta, abierto a cualquier empresario.

DURACIÓN: “El Sistema Dinámico de Contratación (SDC), para el suministro de Biodiesel tendrá una duración de 4 años.

Desde el momento de su publicación en el DOUE y en el BOE y hasta la expiración del procedimiento (al cabo de cuatro años), cualquier profesional o empresa que cumpla con los requisitos exigidos, de capacidad, habilitación profesional y solvencia, podrá solicitar su admisión al sistema sin que exista un plazo límite de admisión. Del mismo modo, los candidatos que hubieran sido admitidos al SDC se podrán dar de baja en cualquier momento, mediante el envío de una carta a través de medios electrónicos manifestando su deseo de darse de baja en el sistema.”

El hecho de haber sido admitido al SDC, implica únicamente el derecho a recibir por medios electrónicos o telemáticos la invitación a participar en la licitación, que se articulará a través de una subasta electrónica, sin que exista ninguna obligación de participar.”

**4.-LAS CENTRALES DE CONTRATACIÓN.**

El último de los sistemas de racionalización de la contratación de las Administraciones Públicas que regula la LCSP 2017 son las centrales de contratación (artículos 227 a 230).

Tal como dice Jesús Colás Tenas; “*la necesidad de realizar compras globales como medio para alcanzar un beneficio, con la obtención de mejores precios en las adquisiciones, y racionalizar el sistema de las adquisiciones públicas – la intendencia pública – mediante la ordenación de las compras públicas, no es cuestionada por nadie; y menos aún en tiempos de crisis económica que demandan medidas de austeridada, racionalidad y control del gasto. (…)*

*Para llevar a cabo estas políticas de compras globales, y como alternativa a las formas tradicionales de la organización de los servicios de contratación, surgen las centrales de compras, o centrales de contratación; junto a varios mecanismos de contratación: los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de contratación. Es lo que se conoce como sistemas de racionalización de compras o técnicas de racionalización de la contratación.*”

Los acuerdos marco, los sistemas dinámicos de contratación y las centrales de compras, son técnicas que tienen como finalidad simplificar y agilizar los procedimientos de contratación pública y, sobre todo, reducir gastos en la contratación pública. Son técnicas que permiten obtener los beneficios de las economías de escala en la planificación de las compras y suministros, especialmente en los que tienen lugar a largo plazo, a la vez que aseguran una provisión o abastecimiento regular, de los servicios o suministros, mediante la elección o selección de aquellas empresas interesadas en los contratos que puedan llegar a celebrarse durante un periodo determinado de tiempo.

Además, en la actualidad, las centrales de contratación añaden un elemento de valor a la gestión de la contratación pública: la transparencia. Transparencia en materia de publicidad de las transacciones, control administrativo y generación de un historial de compras y procedimientos disponible, de forma inmediata, para su valoración y auditoría. Finalmente, las centrales de contratación proyectan a los ciudadanos una idea positiva acerca de que es posible la gestión pública, desde lo público, con eficacia y eficiencia. Y en algunos casos, con excelencia.

**4.1.-Concepto de central de Compras.**

Afirma Victor Almonacid que se puede definir Central de compras como un “Poder adjudicador que realiza actividades de compra centralizadas y, eventualmente, actividades de compra auxiliares“ (art. 2.1.16 de la [Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=celex%3A32014L0024), en adelante DCP). La Directiva europea de 2004 ya definía central de compras como “un poder adjudicador que adquiere suministros y/o servicios destinados a (otros) poderes adjudicadores, o adjudica contratos públicos o celebra acuerdos marco de obras, suministro o servicios destinados a poderes adjudicadores” (artículo 1.10 de la Directiva 2004/18/CE). Todas las entidades del sector público pueden centralizar la contratación de obras, servicios y suministros, a través de servicios especializados, a los que llamamos centrales de contratación o centrales de compras.

Las centrales de contratación serán por lo tanto poderes adjudicadores que actúan como servicios especializados que se encargan de adquirir suministros y servicios para los entes del sector público mediante la formalización de un contrato o a través de un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición.

En todo caso estas centrales de contratación sujetarán, en la adjudicación de los contratos y acuerdos marco que celebren, a las disposiciones de la LCSP 2017 y sus normas de desarrollo.

**4.2.-Finalidad**.

En cuanto a la finalidad de las centrales de contratación, existe unanimidad en la doctrina administrativa de las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa y en la doctrina científica. Así, y como se significa en el informe 5/09, de 18 de diciembre, de la JCCA Baleares: «El objetivo de las centrales de contratación es conseguir una mayor eficacia de la actividad contractual de los entes públicos, tanto desde el punto de vista de gestión, ya que concentra la tramitación de los procedimientos en órganos especializados, evitando que haya una multiplicidad de órganos de contratación dedicados a la adquisición de productos similares y favoreciendo la simplificación administrativa, como desde el punto de vista económico, ya que se aprovecha la reducción de costes que se puede obtener mediante adquisiciones a gran escala, lo que permite una mayor eficiencia de los recursos».

En el informe 5/2010 de la JCCA Aragón, de 14 de abril, se insiste en que: «conviene recordar que los principales objetivos de esta técnica organizativa son la seguridad jurídica y la confianza de los potenciales licitadores. Y permite una eficaz transparencia que, acompañada de una simplificación de los procedimientos, logra obtener, a través de las economías de escala, una eficiente utilización de los recursos públicos —en los términos del artículo 1 LCSP—».

Y, según la JCCA Cataluña, informe 10/2011, de 27 de octubre, las centrales de compra, como servicios especializados que constituyen sistemas para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos públicos, son instrumentos de colaboración y de asistencia y cooperación jurídica y técnica que tienen por finalidad conseguir más eficacia en la contratación pública, facilitando y simplificando la gestión y reduciendo el gasto público.

El análisis de los efectos de un cambio desde la descentralización de las compras a un sistema centralizado, no puede pasar por alto las consecuencias que esa medida puede tener a medio y largo plazo sobre la estructura de mercado de los productos afectados.

Porque no hay duda de que el elevado volumen de demanda engendrado por la centralización (y que, es una de las bases de ahorro para el sistema) puede dejar en una situación precaria a las pequeñas y medianas empresas que operan en mercados locales, toda vez que encontrarían dificultades para acceder a las licitaciones de la central de contratación. El peligro, obviamente, es que las grandes empresas oferten precios y condiciones generales de provisión de los productos afectados capaces de sacar del mercado a los pequeños y medianos competidores, aún a costa de soportar ellas mismas estrechos márgenes durante un tiempo, para poder posteriormente elevar sus precios en un entorno menos competitivo.

**4.3.-Regulación y principales novedades de la LCSP 2017.**

El art. 227.1 de la LCSP establece que “las entidades del sector público podrán centralizar la contratación de obras, servicios y suministros, atribuyéndola a servicios especializados”

Las centrales de contratación actuarán adquiriendo suministros y servicios para otros entes del sector público, o adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición para la realización de obras, suministros o servicios destinados a los mismos.

En los acuerdos marco de contratación centralizada podrán celebrarse contratos basados entre las empresas y entes del sector público parte del acuerdo marco, así como por otros entes del sector público, siempre que dichos entes, entidades u organismos se hubieran identificado en el pliego regulador del acuerdo marco, y se hubiera hecho constar esta circunstancia en la convocatoria de licitación. De esta forma se permite que un acuerdo marco adjudicado a través de esta central de compras pueda quedar abierto a la incorporación de nuevas entidades del sector público que se puedan beneficiar del mismo.

Una de las novedades que presenta la LCSP 2017 y que afecta directamente a las Entidades Locales es la posibilidad de que ahora cualquier Entidad Local podrá crear una central de contratación por acuerdo de Pleno, ya que el e artículo 204.2 del TRLCSP sólo preveía dicha posibilidad en el ámbito de la Administración Local, para las Diputaciones Provinciales. Del mismo se contemplaba también esta posibilidad para las Comunidades Autónomas y para las ciudades de Ceuta y Melilla.

Además a nivel local tenemos que tener en cuenta que la Disposición Adicional tercera en su punto 10 establece que

*“Las Entidades Locales, sin perjuicio de la posibilidad de adherirse al sistema estatal de contratación centralizada y a las centrales de contratación de las Comunidades Autónomas y de otras Entidades Locales, tal y como prevé el apartado 3 del artículo 228, podrán adherirse también a las centrales de contratación que creen conforme a esta Ley las asociaciones de entidades locales a que se refiere la* [*disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril*](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t11.html#I863)*, así como a las creadas por la Administración General del Estado.*”

De esta forma reconoce también la posibilidad de que las Entidades Locales se puedan adherir a las centrales de contratación que sean creadas por la FEMP o en su caso por la FEGAMP por poner un ejemplo.

Y la Disposición Adicional Segunda en su punto 6 establece que: *“En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes las competencias en materia de contratación podrán ser ejercidas por los órganos que, con carácter de centrales de contratación, se constituyan en la forma prevista en el artículo 228 de la presente Ley, mediante acuerdos al efecto.*

*Asimismo podrán concertarse convenios en virtud de los cuales se encomiende la gestión del procedimiento de contratación a las Diputaciones provinciales o a las Comunidades Autónomas de carácter uniprovincial.”*

En todo caso, no podemos olvidar que a nivel local el artículo 36.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, establece que será competencia de las Diputaciones Provinciales entre otras: “La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.”

Por lo que puede surgir la duda de si teniendo en cuenta que la LCSP 2017 permite a todas las Entidades Locales la creación de centrales de contratación y sin embargo la LBRL establece que en los municipios de menos de 20.000 habitantes dicha competencia será de las Diputaciones, si sería posible la creación de una central de contratación por un municipio de menos de 20.000 habitantes. Desde mi punto de vista, debe realizarse una interpretación conjunta de ambas normas de tal manera que en municipios de más de 20.000 habitantes la prestación del servicio de contratación centralizada deberá ser prestado por la Diputación Provincial y en municipios de más de 20.000 habitantes, sin perjuicio de que también puedan adherirse a la central de contratación provincial, podrán crear sus propias centrales de contratación.

Sin embargo, otra interpretación podría considerar que en atención a la modificación operada por la LCSP 2017 permitiendo la creación de centrales de contratación a cualquier Entidad Local frente al TRLCSP que sólo permitía su creación a las Diputaciones Provinciales, y tratándose la LCSP 2017 una norma posterior a la LBRL, cualquier Municipio independientemente de su población podría crear una central de contrataciones.

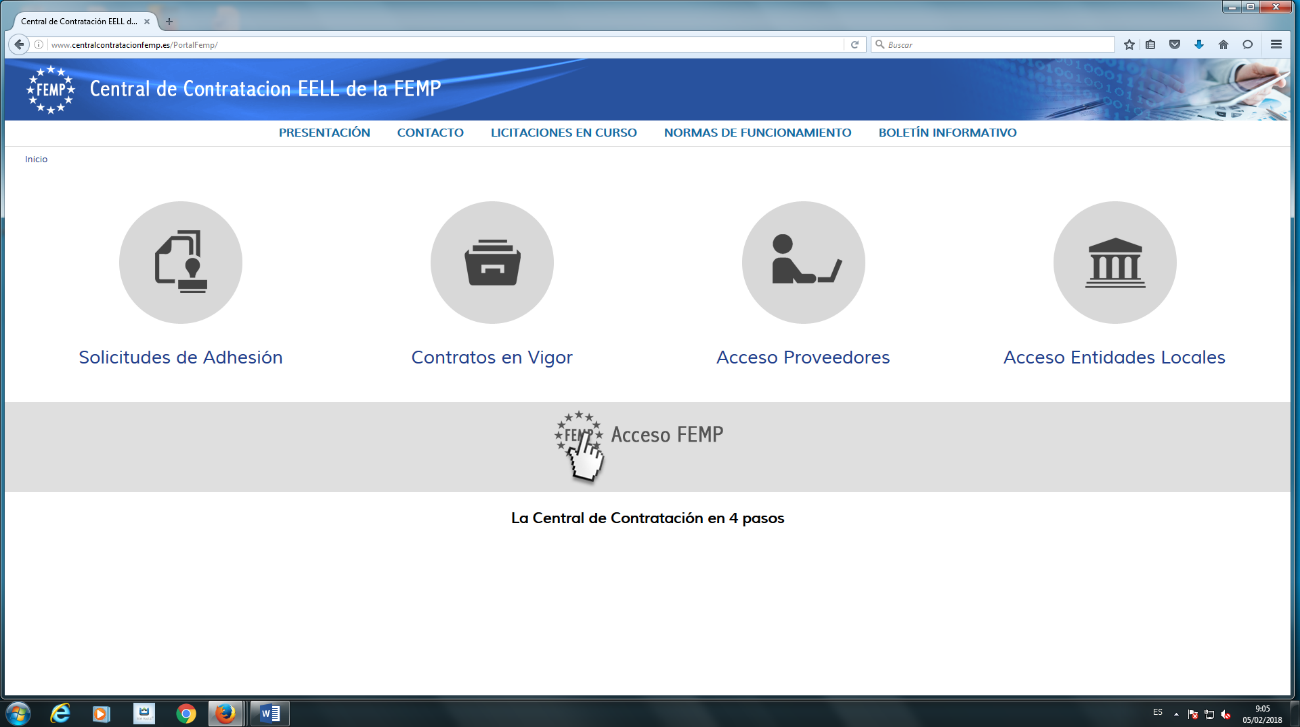
En todo caso parece poco probable y poco operativo que un municipio de menos de 20.000 habitantes cree una central de contratación propia, aun así entendemos que la interpretación más adecuada sería la primera.

Por último los artículos 229 y 230 de la LCSP regularían la contratación centralizada en el ámbito estatal y el sistema estatal de contratación centralizada, que dado el ámbito local del presente curso, no se considera oportuno profundizar en los mismos.

Analizados los rasgos más característicos de las centrales de contratación, resta señalar algunos ejemplos de centrales de contratación actualmente existentes. Así podemos citar las siguientes:

**Ejemplo 1.-Central de contratación de la FEMP.**

<http://www.centralcontratacionfemp.es/PortalFemp/>



Como hemos señalado anteriormente la Disposición Adicional Tercera punto 10 de la LCSP 2017 contempla esta posibilidad al igual que ya la recogía el TRLCSP.

Entre otras licitaciones a las que se podrá adherir cualquier Entidad Local que forme parte de la FEMP estarían a día de hoy:

* [Acuerdo Marco para la prestación de un servicio de mediación de riesgos y seguros de la Central de Contratación de la FEMP](http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0cwMEY2tj7CcpybPRwfpAGzX9KyAfrSeKL) El Acuerdo Marco, adjudicado a la mercantil WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. para los Lotes 1, 2, 3, 4 y 6, mediante procedimiento abierto, tiene por objeto la prestación, a través de la Central de Contratación, de un servicio de mediación de riesgos y seguros, cuya gestión corresponde a las Entidades Locales Adheridas.
* [Acuerdo Marco para el Suministro de gas natural de la Central de Contratación de la FEMP,](http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0cfDHmvBAMvt3RCKg0YWa9JwXkUakdMnwX) que tiene por objeto regular las condiciones técnicas, económicas, administrativas que han de regir el suministro de gas natural para la Central de Contratación de la FEMP por parte del suministrador, como entidad adjudicataria de dicho suministro, y los derechos y obligaciones que se derivan para las Partes.
* [Acuerdo Marco para el Suministro de electricidad en alta y baja tensión de la Central de Contratación de la FEMP,](http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0cyqqvQtucFb5aYA9ACPSwRYBuGY_QgsWa) El presente Acuerdo tiene por objeto el suministro de electricidad en alta y baja tensión para la Central de Contratación de la FEMP, así como las condiciones que regirán los contratos basado que realicen las Entidades Locales interesadas.
* [Servicio para la Gestión de Cobros en el Extranjero de Sanciones en Materia de Tráfico](http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout3/Layout3_Personalizables/MS_Maestra_3/_MznynrPoTrU6CM-Yw1KFsmaTMxyVKz0csb3uuF_XfHhukk_tupHGgjja7xyatt2e) a titulares y conductores con domicilio fuera de España, en el que ya participan 190 Entidades Locales y que canaliza el cobro de dichas sanciones para la Administración interesada y el cumplimiento de todas las operaciones logísticas de soporte para obtener el pago de la sanción por parte de los infractores, respetando los acuerdos y las convenciones en vigor con los Estados miembros de la UE.

**Ejemplo 2.-Central de contratación de la Diputación Provincial de A Coruña**.

<https://www.dicoruna.es/contratacion/>



Como ya se ha analizado las competencias en materia de contratación centralizada para los municipios de menos de 20.000 habitantes le corresponden a la Diputación según lo establecido en la LBRL, es por ello por lo que la Diputación Provincial de A Coruña también ha establecido su central de contratación en la que entre otros figuran estos contratos:

 [Contratación por la Central de Contratación de la Diputación Provincial de A Coruña del acuerdo marco para el suministro sucesivo y por precio unitario de Workstation para Autocad con destino a la Diputación y los Ayuntamientos y Entidades de la Provincia adheridos a la Central](https://www.dacoruna.gal/licitacion/licitacion/1636)

 [Suministro sucesivo y por precio unitario de papel de reprografía con destino a la Diputación Provincial de A Coruña y a los ayuntamientos o entidades de la provincia adheridos a la central de contratación. Lote 1: Papel DIN A4](https://www.dacoruna.gal/licitacion/licitacion/2032745)

 [Suministro sucesivo y por precio unitario de papel de reprografía con destino a la Diputación provincial de a coruña y a los ayuntamientos o entidades de la provincia adheridos a la central de contratación. Lote 2: papel DIN A-3](https://www.dacoruna.gal/licitacion/licitacion/2032775)

 [Contratación por la central de la diputación provincial de a coruña del acuerdo marco para el suministro sucesivo y por precio unitario de material higiénico con destino a la Diputación y a los ayuntamientos o entidades adheridos. Lote 1: papel higiénico](https://www.dacoruna.gal/licitacion/licitacion/2053064)

 [Contratación por la central de la diputación provincial de a coruña del acuerdo marco para el suministro sucesivo y por precio unitario de material higiénico con destino a la Diputación y a los ayuntamientos o entidades adheridos. Lote 2: tissues secamanos](https://www.dacoruna.gal/licitacion/licitacion/2053071)

 [Contratación por la central de la diputación provincial de a coruña del acuerdo marco para el suministro sucesivo y por precio unitario de material higiénico con destino a la Diputación y a los ayuntamientos o entidades adheridos. Lote 3: bobinas papel secamanos](https://www.dacoruna.gal/licitacion/licitacion/2053132)

 [Contratación por la central de la diputación provincial de a coruña del acuerdo marco para el suministro sucesivo y por precio unitario de material higiénico con destino a la Diputación y a los ayuntamientos o entidades adheridos. Lote 4: bobinas industriales seca mans](https://www.dacoruna.gal/licitacion/licitacion/2053133)

 [Contratación por la central de la diputación provincial de a coruña del acuerdo marco para el suministro sucesivo y por precio unitario de material higiénico con destino a la Diputación y a los ayuntamientos o entidades adheridos. Lote 5: jabón líquido](https://www.dacoruna.gal/licitacion/licitacion/2053134)

 [Contratación pola Central de Contratación da Deputación Provincial da Coruña do acordo marco para o subministro sucesivo e por prezo unitario de ordenadores portátiles con destino á Deputación e aos concellos ou entidades da provincia adheridos](https://www.dacoruna.gal/licitacion/licitacion/1465)

**Ejemplo 3.-Central de contrataciones del Estado.**

<https://contratacioncentralizada.gob.es/>



Igualmente las Entidades Locales podrán adherirse a la central de contrataciones del Estado, en ella también nos encontramos contratos marco para entre otros:

-suministro de vehículos.

-suministro de motocicletas.

-suministro de vehículos industriales.

-suministro de vehículos industriales comerciales.

-suministro de PCs y software ofimático.

-suministro de impresoras, fotocopiadoras y escáneres.

-suministro de servidores y sistemas de almacenamiento.

-suministro de servicios de desarrollo.

-suministro de servicios de alojamiento.

-suministro de servicios de equipos y software de comunicaciones.

-suministro de combustible en estaciones de servicio.

-suministro de electricidad.

-suministro de papel.

-suministro de material de oficina.

-suministro de muebles.

-suministro de equipos audiovisuales.

**5.-EL PERFIL DEL CONTRATANTE Y LA PLATAFORMA DE CONTRACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.**

(arts. 63, 135, 347 y Anexo III)

**5.1. Concepto.**

La LCSP 2017 incrementa sensiblemente las obligaciones de publicidad activa de los contratos a través del perfil del contratante tanto en comparación con el TRLCSP como con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El perfil del contratante fue una novedad introducida por la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público posteriormente trasladada al TRLCSP 3/2011, de 14 de noviembre, como una nueva forma de facilitar a los interesados la información relativa a la actividad contractual a través de Internet asegurando la transparencia y el acceso público y rápido.

Se define como un medio de difusión, a través de Internet, de la diferente información de los contratos que se genera en los órganos de contratación y que tiene su origen en el denominado perfil del comprador que se regulaba como instrumento de publicidad ya en la Directiva 2004/18/CE.

La regulación contenida en la LCSP 2017 supone una novedad en un doble sentido:

-**Aumenta sensiblemente la información que debe ser publicada de forma obligatoria en el perfil del contratante**.

-Mientras que en el TRLCSP la publicación en el perfil aparecía muchas veces como complementaria o subordinada a la publicación de los anuncios de licitación en los boletines oficiales, en la LCSP 2017, **en la mayoría de los casos será suficiente con la publicación en el perfil del contratante**.

Efectivamente el artículo 135 de la LCSP establece que:

“El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas, a excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, se publicará en el perfil de contratante. En los contratos celebrados por la Administración General del Estado, o por las entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones Públicas, el anuncio de licitación se publicará además en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada la licitación deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea», debiendo los poderes adjudicadores poder demostrar la fecha de envío del anuncio de licitación.”

Lo que a nivel local implicará que en la práctica será suficiente con la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante, salvo cuando se trate de un contrato SARA en el que será además necesaria su publicación en el DOUE.

Los anuncios de licitación de contratos contendrán la información recogida en el anexo III de la LCSP 2017.

**5.2.-Información a publicar**

**5.2.1.-Características de la información.**

El artículo 63 de la LCSP 2017 establece una serie de características que deberá cumplir tanto el perfil del contratante como la información alojada en el mismo, de forma sintética podemos resumirla de la siguiente forma:

1. La forma de acceso al perfil del contratante deberá hacerse constar en los pliegos y documentos equivalentes, así como en los anuncios de licitación en todos los casos.

(Nótese aquí la incongruencia de la regulación teniendo en cuenta que como se acaba de señalar, en la mayoría de las ocasiones el anuncio de licitación solo tendrá que ser publicado en el perfil del contratante, con lo que nos encontraremos información de cómo acceder al perfil del contratante en un anuncio de licitación que precisamente solo está alojado en dicho perfil).

1. La difusión del perfil del contratante no obstará la utilización de otros medios de publicidad adicionales en los casos en los que así se establezca. Nada impide que se utilicen otros medios de publicidad.

A este respecto conviene recordar de nuevo aquí que el artículo 326.1 de la Ley 571997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia sigue estableciendo que: “*Todos los procedimientos para la adjudicación de los contratos, con excepción de los procedimientos negociados, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el «Diario Oficial de Galicia». Además, cuando por razón de su cuantía estén sujetos a publicación en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».”*

Sin perjuicio de que voluntariamente si se considera procedente no se observa ningún obstáculo para que se pueda proceder a la publicación de anuncio de licitación en el BOP y/o en el DOG, entendemos que el artículo 326.1 ha de considerarse derogado por la normativa de la LCSP 2017, de tal manera que no será obligatoria para las Entidades Locales la publicación del anuncio de licitación en el BOP y/o en el DOG, siendo suficiente con la publicación en el perfil del contratante y en su caso, cuando resulte procedente en el DOUE.

1. El acceso a la información del perfil del contratante será libre, no requiriendo identificación previa. No obstante, podrá requerirse esta para el acceso a servicios personalizados asociados al contenido del perfil tales como suscripciones, envío de alertas, comunicaciones electrónicas y envío de ofertas, entre otras.

(Sorprende de nuevo la imprecisión de la Ley en este punto, ya que si bien es probable que para la subscrición o envío de alertas sea suficiente con la identificación electrónica del sujeto, para el envío de ofertas resultará necesario probablemente la firma electrónica, no resultando suficiente con la identificación, ya que implica un acto de voluntad y consentimiento. Todo ello en sintonía con la distinción entre identificación y firma electrónica realizada entre otros en los artículos 9,10 y 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común).

1. Toda información contenida en los perfiles de contratante se publicará en formatos abiertos y reutilizables, y permanecerá accesible al público durante un período de tiempo no inferior a 5 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información.

5.2**.2.Información de necesaria publicación.**

A partir del 9 de marzo de 2018, fecha de entrada en vigor de la LCSP 2017, se aumenta sensiblemente la documentación que resulta obligatorio publicar en el perfil. Dicha materia es regulada ahora en el **artículo 63** de la LCSP 2017 que podemos entender que deroga implícitamente las previsiones del artículo 8.1 a) de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno al tratarse la ley de contratos de una ley especial y posterior.

El artículo 63.2 establece una declaración global de la información que debe contener este perfil del contratante:

*“El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos y documentos referentes a la actividad contractual de los órganos de contratación. En cualquier caso, deberá contener tanto la información de tipo general que puede utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación como puntos de contacto, números de teléfono y de fax, dirección postal y dirección electrónica, informaciones, anuncios y documentos generales, tales como las instrucciones internas de contratación y modelos de documentos, así como la información particular relativa a los contratos que celebre*.”

(Sorprende de nuevo la incoherencia de la LCSP 2017 en este punto, en donde tras insistir en la necesidad de las comunicaciones electrónicas obligatorias entre la Administración y los licitadores en varios momentos de su articulado, después establece la necesidad de que en el perfil figure la dirección postal, el número de teléfono, o incluso el fax este último un elemento completamente anacrónico si analizamos los medios de comunicación de la sociedad actual).

Repasamos ahora a continuación y sin ánimo de ser exhaustivos los principales elementos que deben ser objeto de publicación el perfil del contratante a partir de la entrada en vigor de la LCSP 2017:

a) La memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios, la justificación del procedimiento utilizado para su adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del abierto o del restringido, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso, y el documento de aprobación del expediente.

b) El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto base de licitación y el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

c) Los anuncios de información previa, de convocatoria de las licitaciones, de adjudicación y de formalización de los contratos, los anuncios de modificación y su justificación, los anuncios de concursos de proyectos y de resultados de concursos de proyectos, con las excepciones establecidas en las normas de los negociados sin publicidad.

d) Los medios a través de los que, en su caso, se ha publicitado el contrato y los enlaces a esas publicaciones.

e) El número e identidad de los licitadores participantes en el procedimiento, así como todas las actas de la mesa de contratación relativas al procedimiento de adjudicación o, en el caso de no actuar la mesa, las resoluciones del servicio u órgano de contratación correspondiente, el informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas, en su caso, los informes sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad y, en todo caso, la resolución de adjudicación del contrato, con la información detallada en el artículo 151.2 de la LCSP:

– En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.

– Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el artículo 126, apartados 7 y 8, los motivos de la decisión de no equivalencia o de la decisión de que las obras, los suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

– En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o el diálogo con los licitadores.

f) La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato, el desistimiento del procedimiento de adjudicación, la declaración de desierto, así como la interposición de recursos y la eventual suspensión de los contratos con motivo de la interposición de recursos.

g) La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. Quedan exceptuados de la publicación aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores.

h) Los procedimientos anulados, la composición de las mesas de contratación que asistan a los órganos de contratación, así como la designación de los miembros del comité de expertos o de los organismos técnicos especializados para la aplicación de criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor en los procedimientos en los que sean necesarios.

i) En todo caso deberá́ publicarse el cargo de los miembros de las mesas de contratación y de los comités de expertos, no permitiéndose alusiones genéricas o indeterminadas o que se refieran únicamente a la Administración, organismo o entidad a la que representen o en la que prestasen sus servicios. Se publicarán las razones que motiven la elección de los asesores externos que resulten seleccionados (art. 115.1).

j) La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior a 50.000 euros, IVA excluido. La información relativa a los encargos de importe superior a 5.000 euros deberá publicarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de encargos será, al menos, su objeto, duración, las tarifas aplicables y la identidad del medio propio destinatario del encargo, ordenándose los encargos por la identidad del medio propio.

k) El sistema informático que soporte el perfil de contratante deberá contar con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de la información que se incluya en el mismo.

l) Podrán **no publicarse** determinados datos relativos a la celebración del contrato en los supuestos que establece el artículo 154.7 de la LCSP. En todo caso, cada vez que el órgano de contratación decida excluir alguna información de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá justificarlo en el expediente.

El artículo 154.7 permite que no se publique determinados datos relativos a la celebración del contrato, debiendo solicitarse de forma preceptiva un informe al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que deberá evacuarlo en el plazo de 10 días:

“cuando  se considere, justificándose debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado”.

Teniendo en cuenta que muchas Comunidades Autónomas han creado en sus respectivas leyes de transparencia institucionales análogas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en mi opinión, serán las respectivas instituciones autonómicas, donde existan, las que deberán emitir dicho informe en su correspondiente ámbito competencial, únicamente autonómico, o también autonómico y local.

La LCSP no aclara la naturaleza del informe y las consecuencias de su no emisión en plazo. A mi juicio, el informe no es vinculante para el órgano de contratación y la no emisión en plazo no interrumpe el procedimiento y deberá ser entendido como favorable.

Si establece la LCSP 2017, que no será necesario solicitar dicho informe cuando con anterioridad se hubiese efectuado por el órgano de contratación consulta sobre una materia idéntica o análoga.

Además, en el cumplimiento de las nuevas obligaciones de publicidad activa en el perfil del contratante (como también en las solicitudes de acceso a la información), habrá que tener en cuenta la confidencialidad regulada en el artículo 133:

“los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores”.

Ahora bien, el deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles.

Finalmente, no hay que olvidar que el deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

o) Las consultas preliminares del mercado que se realicen, en su caso, deberán constar en un informe. En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas. Este informe estará motivado, formará parte del expediente de contratación, y estará sujeto a las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones (artículo 115.3 LCSP).

p) Los órganos de contratación que hubieren modificado un contrato durante su vigencia, con independencia de si este está o no sujeto a regulación armonizada y de la causa que justifique la modificación, deberán publicar en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma, que deberá ir acompañado de las alegaciones del contratista y de todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su aprobación, incluidos aquellos aportados por el adjudicatario o los emitidos por el propio órgano de contratación (artículo 207.3 LCSP).

Por lo tanto a partir del 9 de marzo de 2018, habrá que cumplir las obligaciones impuestas por el artículo 63 de la LCSP más todas aquellas que también están recogidas en las respectivas leyes autonómicas de transparencia, algunas de las cuales, exigen información diversa o adicional a la exigida ahora por el artículo 63 de la LCSP. Y lo mismo sucede en relación con las ordenanzas municipales que contemplen la obligación de publicar información no contenida en el nuevo artículo 63 de la LCSP.

A estos efectos, conviene recordar que las obligaciones de publicidad activa impuestas por el artículo 63 de la LCSP son mínimas. No existe ninguna limitación legal a que una administración o entidad decida publicar más información contractual que la prevista con carácter básico por la LCSP, siempre, lógicamente,  que se protejan los restantes intereses públicos o privados concurrentes (por ejemplo, protección de datos personales, propiedad intelectual, etc.).

Así, por ejemplo, el artículo 13.1., apartados d), e), i) de la Ley catalana 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, amplia la información a publicar en la página web al número de licitadores, los criterios de adjudicación, el cuadro comparativo de ofertas y sus respectivas puntuaciones, los acuerdos e informes técnicos del proceso de contratación, las licitaciones anuladas, las resoluciones anticipadas, las resoluciones de los recursos especiales, de las cuestiones de nulidad y de las resoluciones judiciales definitivas en materia de contratación, así como los actos de desistimiento, renuncia y resolución de contratos.

Asimismo, el artículo 9.1.a) de la Ley valenciana  2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, deja fuera de la publicidad activa algunos extremos que sí que incluye la anterior ley catalana, pero añade los casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos, la subcontratación, indicando la identidad de los subcontratistas, el importe de cada subcontratación y el porcentaje en volumen que cada una suponga sobre el total del contrato.

El artículo 28.1.d) y 2.e) de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, incluye la composición y convocatoria de las mesas de contratación y las penalidades impuestas por el incumplimiento de los contratistas.

Por ejemplo, el artículo 22.1.e) de la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza exige la publicación en la sede electrónica del listado de facturas de importe superior a quinientos euros fiscalizadas y contabilizadas por el Ayuntamiento.

Por lo tanto en resumen se produce un incremento exponencial de la información que deberá ser obligatoriamente alojada en el perfil del contratante, y sin embargo, aún se puede señalar determinada información **cuya publicación no resulta obligatoria**, tal como señala Miguel Ángel Blanes:

a) El informe del jurado con la clasificación de los proyectos, los méritos de cada proyecto, junto con sus observaciones y cualesquiera aspectos que requieran aclaración (artículo 157.5 LCSP).

b) El dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de interpretación, modificación, nulidad y resolución de los contratos y responsabilidad contractual (artículo 191.3 LCSP)

c) El acto formal y positivo de recepción o conformidad con la prestación del contrato y el informe de Intervención de la Administración de comprobación de la inversión (artículo 210.2 LCSP).

d) El informe de las oficinas o unidades de supervisión de los proyectos cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido (artículo 235 LCSP).

e) El acta de comprobación del replanteo de las obras (artículo 237 LCSP).

f) El informe del Director Facultativo de las Obras justificativo de la modificación del contrato de obras (artículo 242 LCSP).

g) La certificación final de las obras ejecutadas, el acta de recepción de las obras y el informe del Director Facultativo de las obras sobre el estado de las mismas antes del vencimiento del plazo de garantía (artículo 243 LCSP).

Por otra parte, la nueva LCSP no se refiere ni exige la publicación activa de estos otros documentos:

a) un informe-resumen final económico con detalle del precio de adjudicación y coste final del contrato, con sus respectivas modificaciones y revisiones de precios incluidas con el objeto de facilitar el control de las indeseables desviaciones económicas;

b) los informes emitidos en el expediente de contratación por los servicios jurídicos (secretarios generales, abogacía, et.), técnicos (arquitectos, ingenieros, etc.) y económicos (intervención), al menos, respecto a los contratos de mayor importancia económica respecto a cada entidad pública.

c) las sanciones o penalidades impuestas por el órgano de contratación;

d) el listado de facturas fiscalizadas y contabilizadas, al menos, las superiores a 5.000 euros -importe relativo a los contratos menores pagados con anticipos de caja fija excluidos de publicidad activa- , con detalle de su estado de cobro.

**3.1.-Necesidad de alojar el perfil del contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público.**

El éxito y proliferación de la figura del perfil del contratante desde su creación por la Ley 30/2007, ha generado una situación de cierto caos y dispersión especialmente para el potencial licitador que en ocasiones se ve abocado en la actualidad a un peregrinar electrónico visitando los diversos perfiles de contratación que las distintas entidades, locales, autonómicas y estatales han ido creado.

A fin de limitar o eliminar dicha disfuncionalidad la LCSP 2017 parte de una premisa. “TODOS LOS PERFILES DEL CONTRATANTE E UN ÚNICO PUNTO DE ACCESO”.

Así lo establece el artículo 347 de la LCSP 2017 que establece por un lado la obligación de que el Estado ponga a disposición de todos los órganos de contratación del sector público una plataforma electrónica que permita la difusión a través de Internet de sus perfiles de contratante, así como prestar otros servicios complementarios asociados al tratamiento informático de estos datos.

Los perfiles de contratante de los órganos de contratación de todas las entidades del sector público estatal deberán alojarse de manera obligatoria en la Plataforma de Contratación del Sector Público, gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través de la misma. En las páginas web institucionales de estos órganos se incluirá un enlace a su perfil de contratante situado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Se admite que las Comunidades Autónomas puedan optar entre utilizar la plataforma de contratación del Estado o bien establecer la suya propia pero en este último caso deberán publicar, bien directamente o por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la información en el caso de que contaran con sus propios servicios de información, la convocatoria de todas las licitaciones y sus resultados en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Por lo que respecta a las Entidades Locales podrán optar, de forma excluyente y exclusiva, bien por alojar la publicación de sus perfiles de contratante en el servicio de información que a tal efecto estableciera la Comunidad Autónoma de su ámbito territorial, o bien por alojarlos en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

De esta forma la Plataforma de Contratación del Sector Público se convierte en una suerte de “**cuartel general”** donde se alojarían **de forma obligatoria**, bien directamente, bien de forma indirecta los perfiles de contratante de las distintas entidades públicas contratantes

Esta obligación, reflejada en el artículo 347 LCSP2017, se ve reforzada al añadirle una consecuencia trascendental frente al incumplimiento: la nulidad de pleno derecho. Así lo determina el artículo 39, en su apartado 1.c) ([Nulidad de pleno derecho por no estar en PLACE )](http://concepcioncampos.org/novedad-lcsp-nulidad-de-pleno-derecho-por-no-estar-en-place-estamos-preparados/) consecuencias que exigen que si el perfil de la respectiva entidad no se encuentra ya alojado en la plataforma común, deban iniciarse ya los trámites para que, a partir del 9 de marzo, los contratos no se vean afectados por una causa de nulidad que, además, es de fácil comprobación.

La plataforma deberá contar con un sistema de sellado de tiempo que permita acreditar fehacientemente el inicio de la difusión pública de la información que se incluya en la misma.

La información se publicará en estándares abiertos y reutilizables.

**6.- REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS. DEL SECTOR PÚBLICO Y EL REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS.**

La LCSP 2017 dedica los artículos 337 a 345 a regular el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE).

El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público tiene por objeto la inscripción de los datos y circunstancias que resulten relevantes para acreditar las condiciones de aptitud de los empresarios para contratar con las Administraciones Públicas y demás organismos y entidades del sector público, incluidas las facultades de sus representantes y apoderados, así como la acreditación de todo ello ante cualquier órgano de contratación del sector público.

La finalidad de este Registro es el evitar que las empresas licitadores tengan que estar reiteradamente presentando la misma documentación ante el órgano de contratación por cada contrato que este licite. En esta misma línea iría por ejemplo el artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas cuando establece el derecho del interesado a no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.

El Registro será público y se podrá acceder de forma abierta, previa identificación de la persona que accede. Además contará con un buscador que facilite su uso.

**6.1Titularidad del Registro**.

El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público dependerá del Estado, en concreto del Ministerio de Hacienda y su llevanza corresponderá a los órganos de apoyo técnico de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

No obstante sin embargo el artículo 341 de la LCSP 2017 permite la llevanza de un registro de licitadores y empresas clasificadas por las Comunidades Autónomas, que acreditará los datos y circunstancias de los empresarios ante los órganos de contratación de la propia Comunidad Autónoma, de las entidades locales de su ámbito territorial, y de los organismos y entidades dependientes de una y otras.

No cabría así pues, la posibilidad de hacer valer ante un Ayuntamiento de Galicia, la inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla – León por ejemplo.

**6.2. Interconexión de los Registros de licitadores.**

La LCSP 2017 pretende asegurar una interconexión y relación permanente entre el ROLECE y los posibles Registros de las Comunidades Autónomas, así el articulo 345 establece que: “*El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y los Registros de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades Autónomas se facilitarán mutuamente la información relativa a las prohibiciones de contratar en ellos inscritas.”*

Pero además y como novedad también se establece que este ROLECE estará interconectado y será interoperable con el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. (REA).

De tal manera que los órganos de contratación consultarán primero el ROLECE para verificar la inscripción de poderes, y si los poderes no estuviesen inscritos, consultarán subsidiariamente los registros electrónicos de apoderamiento de las Administraciones Públicas a través del Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración del Estado.

En caso de discrepancia entre los poderes inscritos, prevalecerá el inscrito en el ROLECE frente a los inscritos en cualquier otro registro de apoderamientos.

**6.3 Datos inscribibles en el ROLECE.**

La LCSP establece una serie de inscripciones que tendrán carácter voluntario y otras que serán realizadas de oficio.

1. De oficio.(art. 338).

-La clasificación de los contratistas otorgada por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado o por los organismos autonómicos con competencia para la clasificación de empresas.

-Las prohibiciones para contratar reguladas en el apartado 2 del artículo 73.

1. Voluntaria. (art. 339).

En el Registro podrán constar, cuando así lo solicite el interesado, los siguientes datos y circunstancias relativas a los empresarios:

**a)** Los correspondientes a su personalidad y capacidad de obrar, en el caso de personas jurídicas.

**b)** Los relativos a la extensión de las facultades de los representantes o apoderados con capacidad para actuar en su nombre y obligarla contractualmente.

**c)** Los referentes a las autorizaciones o habilitaciones profesionales y a los demás requisitos que resulten necesarios para actuar en su sector de actividad.

**d)** Los datos relativos a la solvencia económica y financiera, que se reflejarán de forma independiente de la clasificación que, en su caso, tenga el empresario.

**e)** Cualesquiera otros datos de interés para la contratación pública que se determinen reglamentariamente.

Todas las inscripciones practicadas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público tendrán, sin distinción alguna, los mismos efectos acreditativos y eficacia plena frente a todos los órganos de contratación del Sector Público.

**6.4.-Carácter voluntario de la inscripción.(art. 342)**

Salvo los supuestos de inscripción obligatoria o de oficio (clasificación y prohibiciones) la inscripción en los Registros de licitadores y empresas clasificadas será siempre voluntaria para los empresarios, los cuales podrán determinar libremente qué datos desean que se reflejen en tales registros. La inscripción implicará el consentimiento del empresario para la difusión por medios electrónicos de sus datos inscritos, en los términos y con los límites y restricciones que legal o reglamentariamente se determinen.

En todo caso los empresarios inscritos están obligados a poner en conocimiento del registro cualquier variación que se produzca en sus datos inscritos y en todo caso, el órgano competente de la llevanza del Registro procederá a rectificación de oficio de los datos inscritos cuando se verifique que los datos de un asiento son incorrecto, incompletos o no actualizados.

Si bien tal y como señala el artículo 342 de la LCSP 2017 la inscripción en estos registros resulta voluntaria no debemos olvidar que el artículo 159.4.a) de la misma Ley establece expresamente que sólo pueden presentarse en el procedimiento abierto simplificado aquellas empresas que estén inscritas en el ROLECE o en el Registro correspondiente de la Comunidad Autónoma (exigencia que entrará en vigor el 9 de septiembre de 2018, según establece la Disposición Final 16ª.).

Aparentemente este requisito de inscripción en el ROLECE también sería aplicable a los contratos abiertos simplificadísimos o super – simplificados regulados en el artículo 159.6, ya que si bien exime a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, sin embargo no exime expresamente de su inscripción en el Registro, y teniendo en cuenta que el último inciso del artículo 159.6 establece que “en todo lo no previsto en este apartado se aplicará la regulación general del procedimiento abierto simplificado prevista en este artículo.” Debemos llegar a la conclusión de que también será exigible la inscripción para este tipo de contratos abiertos super – simplificados.

Tal aspecto debe ser objeto de crítica ya que resulta algo incoherente con la intención de fomentar la participación de las PYMES en la contratación pública, ya que la realidad, sobre todo en el ámbito local, es que muchas de las actuales empresas que trabajan con la Administración Local carecen de tal registro y supondrá un incremento de requisitos que en muchas ocasiones desanimará a las mismas a participar en las licitaciones públicas.

En este sentido la única posibilidad de eximir de la presentación de esta inscripción en los contratos abiertos super - simplificados sería la previsión establecida en el artículo 159.4.a) de la LCSP que permite dispensar la inscripción en los supuestos en los que se considere que la concurrencia se vea limitada, pero de nuevo resultará complejo determinar cuando se puede considerar que la exigencia de inscripción en el ROLECE va a suponer una limitación de la concurrencia.

**6.5.-El Registro de Contratos del Sector Público.**

El artículo 346 de la LCSP 2017 regula este Registro de Contratos del Sector Público cuya titularidad le corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública y en el que se inscribirán todos los datos básicos de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas y demás entidades del sector pública sujetas a la Ley de Contratos.

Los poderes adjudicadores comunicarán a este Registro los datos básicos entre los que deberán estar:

1. La identidad del adjudicatario.
2. El importe de la adjudicación (desglosados el IVA).
3. Las modificaciones, prórrogas, variaciones de plazo o precio, importe final.
4. Extinción.

Se exceptuarán de la comunicación señalada en este apartado **los contratos excluidos por la presente Ley y aquellos cuyo precio fuera inferior a cinco mil euros, IVA incluido,** siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores. En el resto de contratos inferiores a cinco mil euros, deberá comunicarse el órgano de contratación, denominación u objeto del contrato, adjudicatario, número o código identificativo del contrato e importe final.

Las comunicaciones de datos de contratos al Registro de Contratos del Sector Público se efectuarán por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en la forma que determine el Ministro de Hacienda y Función Pública.

El Registro de Contratos del Sector Público facilitará de modo telemático el acceso a sus datos a los órganos de las Administraciones Públicas que los precisen para el ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la [Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/517991-l-19-2013-de-9-dic-transparencia-acceso-a-la-informacion-publica-y-buen.html), y con las limitaciones que imponen las normas sobre protección de datos de carácter personal, facilitará el acceso público a los datos que no tengan el carácter de confidenciales y que no hayan sido previamente publicados de modo telemático y a través de Internet.

Cabe la posibilidad de que otras Administraciones Públicas creen sus propios Registros de Contratos, sin embargo estos tendrán que intercambiar su información con este Registro de Contratos del Sector Público.

**7.-ENTRADA EN VIGOR Y RÉGIMEN TRANSITORIO**.

**7.1. Entrada en vigor de la Ley :**

Según la disposición final decimosexta, la entrada en vigor de esta Ley lo es en cuatro momentos diferenciados:

- el 9 de marzo de 2018, en que entrará en vigor la mayor parte de la Ley, salvo las excepciones que ahora se dirán;

- el 10 de noviembre de 2017, momento en que entró en vigor ya la disposición final décima referida a una modificación de la normativa sobre el IVA y los artículos 328 a 334 referidos el régimen jurídico de la Junta Consultiva de Contratación del Estado;

- el 10 de septiembre de 2018, momento en que entrará en vigor la obligación de todos los licitadores de procedimientos abiertos simplificados -y los que se denominan coloquialmente como supersimplificados- de estar inscritos en el Registro Oficial correspondiente (obligación impuesta en el apartado 4.a) del artículo 159), y el requisito de que la condición de medio propio se reconozca en los estatutos o actos de creación, con el cumplimiento de los nuevos requisitos que establece la letra d) del apartado 2 del artículo 32;

- por último, el tercer párrafo del apartado 1 del artículo 150, referido a conductas colusorias -aquellas que pueden impedir, restringir, o falsear la competencia por parte de los licitadores-, que entrará en vigor en el momento en que lo haga la disposición reglamentaria a la que se refiere el mismo.

**7.2. Régimen transitorio.**

Es importante tener en cuenta el régimen transitorio que prevé la Ley ya que a las próximas contrataciones que lleven a cabo los Ayuntamientos les será esta de aplicación según las reglas que se contienen en la disposición adicional primera.

El régimen transitorio se recoge en cinco disposiciones transitorias distintas, de las que interesan al ámbito local cuatro de ellas -la DT segunda viene referida al Estado exclusivamente-. Las reglas de transitoriedad de esta Ley responde a estas cuestiones:

1.- ¿A qué procedimientos de contratación se aplica la nueva Ley? La DT primera, en su punto 1 nos da respuesta a esta cuestión. Siguiendo las reglas tradicionales en materia de contratación la Ley determina que será de aplicación a los procedimientos iniciados después del 9 de marzo de 2018, entendiéndose que el momento de quedar iniciados es el de la publicación de las convocatorias (no el de aprobación de los pliegos o la emisión de un informe de necesidad del contrato) o, si son procedimientos negociados sin publicidad, la fecha de aprobación de los pliegos.

2.- ¿Se aplica la nueva Ley a los contratos ya adjudicados? Como regla general, no: la DT primera apartado 2 lo deja claro: efectos, cumplimiento, extinción, modificación, duración y prórrogas se rigen por la normativa anterior -el TRLCSP-. No obstante, hay unas reglas especiales que determinan la aplicación de la nueva Ley a determinados actos a pesar de que sean referidos a contrataciones anteriores a la entrada en vigor, de las cuales reseñamos las más relevantes:

- los acuerdos de rescate y encargos que se hagan con posterioridad al 9 de marzo de 2018 (DT primera punto 3).

- la interposición del recurso especial en materia de contratación, que podrá interponerse contra actos que se dicten tras el 9 de marzo de 2018 aunque sea un expediente al que se aplique la legislación contractual anterior (DT primera punto 4). Esta cuestión es importante tenerla en cuenta a fin de realizar las notificaciones con el pie de recursos correcto.

Las revisiones de oficio y procedimientos de recurso iniciados antes del 9 de marzo seguirán tramitándose conforme al RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP).

3.- ¿Cuándo se aplica la obligación de los licitadores de estar en el Registro de Licitadores?

Ya hemos señalado que la obligación de estar en este Registro lo es para todos los licitadores que se presenten en procedimientos abiertos simplificados (y los que se denominan como supersimplificados), obligación que está demorada hasta el 10 de septiembre de 2018. En tanto llega este momento, la acreditación de capacidad, solvencia y acreditación de ausencia de prohibiciones para contratar se efectuará de la forma establecida en la Ley con carácter general.

4.- Si tengo un medio propio ¿qué debo hacer y en qué plazo? La nueva Ley establece un régimen muy estricto para los medios propios en su artículo 32, estableciendo la letra d) de este que el titular del medio propio debe previamente dar conformidad o autorización expresa respecto del medio que va a utilizar y verificar que cuenta con medios personales y materiales apropiados, debiendo los estatutos o acto de creación de medio propio recoger expresamente los términos a que obliga este artículo 32 d).

Pues bien, la DT cuarta confiere un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley -como ya se ha dicho, hasta el 10 de septiembre de 2018- para que se lleve a cabo esta adaptación estatutaria, aunque desde la entrada en vigor deben cumplirse el resto de requisitos exigidos en las letras a), b) y c) para que pueda utilizarse un medio propio.

5.- Si de mi ayuntamiento dependen poderes adjudicadores que no son Administración

Pública u otros entes del sector público que no son poder adjudicador ¿qué debo hacer?

Las entidades del sector público que no sean poder adjudicador deben adaptar sus instrucciones internas de contratación al nuevo marco legal antes del 9 de julio de 2018, pudiendo hasta entonces seguir con las instrucciones que tuvieran si no contradicen la nueva Ley (DT quinta). Los poderes adjudicadores que no son administración pública deberán estar al régimen de contratación referido en ellos artículos 316 a 320 de la Ley.

**7.3. Derogación normativa.**

La disposición derogatoria solo deroga expresamente el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Siguen en vigor el resto de disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley -así, siguen vigentes, salvo que se opongan a la Ley, por ejemplo, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Bibliografía.**

Ponencia “Novedades de la Ley de Contratos del Sector Público”.(2017) Autor: D. Juan Marquina Fuentes. Vicesecretario de la Diputación de Ourense.

Artículo: “la subasta electrónica como método de adjudicación”.Autor D. Carlos V. Ruíz Rubia. Observatorio de contratación pública. 26/05/2014.

Publicación de la Autoridad Catalana de la Competencia: “Acuerdos Marco en el ámbito de la contratación pública: guía para un uso pro – competitivo. Mayo 2013”.

Observatorio de Contratación Pública. Artículo: “La importancia del valor máximo estimado de un acuerdo marco”. Autora: Teresa Moreno Marroig. 01/09/2014.

Artículo: “La gestión de los contratos de pequeña cuantía según la nueva normativa de contratación pública. Contratos menores, sistemas dinámicos de adquisición y procedimiento abierto simplificado de tramitación sumaria.”. Dª. María del Rosario Delegado Fernández. Revista Gabilex, revista del gabinete jurídico de Castilla – La Mancha nº 12. Diciembre de 2017.

Publicación: “Procesos de homologación de empresas para sistemas dinámicos de contratación”. Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco.

Artículo: “los nuevos procedimientos de contratación y los sistemas para la racionalización de la contratación de las Administraciones Públicas”, autora: Marta Alba Pacheco, Jefa de Contratación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Revista el Consultor de los Ayuntamientos. Especial Ley de Contratos del Sector Público. Nº 23 de 15 de diciembre de 2017. pags 2889 a 2903.

Artículo: “las centrales de contratación provinciales”. Autor D. Jesús Colás Tenas. Oficial Mayor de la Diputación Provincial de Zaragoza, publicado por la Fundación Democracia y Gobierno Local.

Artículo: “¿Qué es una central de compras?”. Autor: Víctor Almonacid. Artículo extraído del blog Nosoloaytos.

Documento de principales novedades da la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público elaborado por la Diputación de Barcelona, área de Secretaría General.

Artículo: “la transparencia en la nueva Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público”. Autor D. Miguel Ángel Blanes. Blog de Transparencia y gobierno abierto. Entrada de 17/11/2017.

Artículo: “5 cambios que deben realizarse en el perfil del contratante antes del 9 de marzo de 2018”. Autora Dª. Concepción Campos. Blog más que leyes. Entrada de 22/12/2017.

Circular de la Asesoría Jurídica de la Diputación Provincial de Huesca sobre la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (fecha de publicación de la Circular 3 de enero de 2018)